

Brechas y desafíos socioeconómicos de los pueblos indígenas de América Latina: retos para el desarrollo con identidad

Autores:

Diana Bocarejo
Caridad Araujo
Carmen Albertos

**División de Género y
Diversidad**

**NOTA TÉCNICA N°
IDB-TN-2280**

Septiembre 2021

Brechas y desafíos socioeconómicos de los pueblos indígenas de América Latina: retos para el desarrollo con identidad

Autores:

Diana Bocarejo

Caridad Araujo

Carmen Albertos

Septiembre 2021

Catalogación en la fuente proporcionada por la
Biblioteca Felipe Herrera del
Banco Interamericano de Desarrollo

Bocarejo, Diana.

Brechas y desafíos socioeconómicos de los pueblos indígenas de América Latina: retos para el desarrollo con identidad
/ Diana Bocarejo, Caridad Araujo, Carmen Albertos.

p. cm. — (Nota técnica del BID ; 2280)

Incluye referencias bibliográficas.

1. Indigenous peoples-Latin America-Social conditions. 2. Indigenous peoples-Latin America-Economic conditions. 3. Indigenous peoples-Employment-Latin America. 4. Indigenous peoples-Health and hygiene-Latin America. 5. Indigenous peoples-Education-Latin America. I. Araujo, Maria Caridad. II. Albertos, Carmen. III. Banco Interamericano de Desarrollo. División de Género y Diversidad. IV. Título. V. Serie.
IDB-TN-2280

Códigos JEL: J10, J15, I30, I00, 013

Palabras Clave: Caracterización socioeconómica, pueblos indígenas, acceso a servicios, educación, salud, empleo, economías indígenas y medio ambiente.

Diana Bocarejo
Caridad Araujo
Carmen Albertos

<http://www.iadb.org>

Copyright © [2021] Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.





BRECHAS Y DESAFÍOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA:

RETOS PARA EL DESARROLLO CON IDENTIDAD

La elaboración de este documento fue liderada por Diana Bocarejo, Caridad Araujo y Carmen Albertos con aportes de Judith Morrison, Cesar Lins, María Antonella Pereira, Nathalia Scarpeta, Carmen Martín, Hugo Us, Ana Grigera, Verónica Tejerina, Carlos Borge y Mateo Vásquez.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
01. INDÍGENAS EN ALC: CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA	6
02. INDÍGENAS EN CONTEXTOS RURALES Y URBANOS	9
- Territorio y tenencia de la tierra	9
- Más allá de la tenencia de la tierra	10
- Retos de los indígenas en las ciudades	10
- Marginalización y lugares vulnerables de habitación	11
- Movilización transfronteriza	12
03. POBREZA POR INGRESOS	13
- Población indígena de ingresos medios y altos	15
04. ACCESO A SERVICIOS	17
- Agua	17
- Electricidad	18
- Internet, celulares y computadoras	19
- Hacinamiento	20
05. EDUCACIÓN	21
06. SALUD	25
07. TRABAJO	28
- Ocupación e informalidad	28
- Sectores económicos de empleo para personas indígenas	31
08. ECONOMÍAS INDÍGENAS	33
09. MEDIO AMBIENTE	36
- Figuras de conservación	36
- Incentivos económicos para la conservación	37
LÍNEAS DE TRABAJO DEL BID	38
REFERENCIAS	40

ÍNDICE DE FIGURAS

GRÁFICO 1.	Pirámides Demográficas de Ecuador y Guatemala	8
GRÁFICO 2.	Población indígena en los ámbitos urbano y rural en América Latina	11
GRÁFICO 3.	Diferencias en la pobreza extrema (\$3.20 2011 PPP/día) entre pueblos indígenas y no indígenas, 2018	13
GRÁFICO 4.	Evolución de la pobreza por ingresos (\$3.2 USD) en poblaciones indígenas	14
GRÁFICO 5.	Evolución de la pobreza por ingresos (\$3.2 USD) en población no indígena y no afrodescendiente	14
GRÁFICO 6.	Evolución de personas indígenas en AL con ingresos medios	15
GRÁFICO 7.	Evolución de personas indígenas en AL con ingresos altos	16
GRÁFICO 8.	Acceso al agua poblaciones no indígenas ni afrodescendientes y poblaciones indígenas en América Latina	17
GRÁFICO 9.	Acceso electricidad poblaciones no indígenas ni afrodescendientes y poblaciones indígenas en América Latina	18
GRÁFICO 10.	Brechas de acceso a tecnologías digitales y electricidad	19
GRÁFICO 11.	Hogares hacinados en poblaciones no indígenas ni afrodescendientes y poblaciones indígenas en América Latina	20
GRÁFICO 12.	Asistencia escolar	22
GRÁFICO 13.	Promedio de años de escolaridad por grupos de edad	23
GRÁFICO 14.	Niveles de empleo en poblaciones indígenas y no indígenas por grupos de edad	28
GRÁFICO 15.	Niveles de empleo formal	29
GRÁFICO 16.	Ingreso per cápita indígenas	31
GRÁFICO 17.	Distribución laboral indígenas por sectores económicos	32
TABLA 1.	Población indígena por país según los últimos censos nacionales del decenio 2010	6
TABLA 2.	Categorías de identificación indígena en estadísticas nacionales después del 2000 y países (censos y encuestas)	7
TABLA 3.	Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que han tenido hijos o están embarazadas	27
TABLA 4.	Ocupados que trabajan por cuenta propia	30
TABLA 5.	Ingresos laborales e informalidad por área geográfica, Bolivia	30



INTRODUCCIÓN

Los derechos de los pueblos indígenas en América Latina siguen afrontando retos considerables para su consolidación debido a las enormes brechas socioeconómicas que continúan experimentando. Los pueblos indígenas no solo han sido reconocidos por su aporte a la riqueza cultural o a la conservación ambiental, sino a la historia y al desarrollo mismo de la región. En este documento se presenta una caracterización socioeconómica de los pueblos indígenas de América Latina con los datos disponibles que incluyen por lo menos nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. A pesar de que podemos documentar un progreso significativo para pueblos indígenas en muchos indicadores sociales en la última década, continúan existiendo brechas en educación, mercados laborales, ingreso y características del hogar. Por otro lado, dado que este análisis utiliza datos previos al 2020, surge la preocupación de que la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de la COVID-19 genere un retroceso de los progresos de la última década para pueblos indígenas, y contribuya a ampliar las brechas aún más.

Esta caracterización abarca principalmente los temas de pobreza, acceso a servicios, educación, salud, empleo, economías indígenas y medio ambiente. Además, la división de Género, Diversidad e Inclusión (GDI) ha realizado un análisis comparativo de los resultados en varios indicadores sociales de personas indígenas versus sus contrapartes no-indígenas y no-afrodescendientes, usando las bases de datos de las encuestas de hogares para Brasil, Chile, Ecuador y

Guatemala del 2008 al 2018. Para otros países de América Latina como Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Paraguay y Venezuela se realiza una sistematización de información de fuentes secundarias para algunos de los temas anteriormente mencionados. Del Caribe sólo se incluyen Belice y Trinidad y Tobago exclusivamente en la caracterización demográfica de los pueblos indígenas. Otros países de la región, como Bahamas, Barbados, República Dominicana, Guyana, Haití, Jamaica y Surinam, no se incluyen en el análisis porque no hay información disponible.

Este documento está organizado en tres secciones. La primera sección muestra las principales características demográficas de la población indígena en la región, su distribución por países y las distintas formas de conteo en las estadísticas nacionales. La segunda sección muestra las diferentes problemáticas sectoriales que enfrentan los pueblos indígenas. Esta sección cubre ocho temas: i) territorio y marginalización en zonas urbanas y rurales; ii) brechas de pobreza; iii) brechas en el acceso a servicios públicos (electricidad, agua corriente, condiciones de hacinamiento e internet); iv) educación y niveles de escolaridad; v) problemas de salud (enfermedades infecciosas, enfermedades de transmisión sexual, salud mental, desnutrición y mortalidad infantil); vi) sectores de trabajo de los pueblos indígenas, niveles de ingreso e informalidad; vii) economías de subsistencia y diversas articulaciones con mercados; viii) medio ambiente y conservación ambiental. Finalmente, en la tercera sección se presentan las principales líneas de trabajo del BID frente a algunas de estas problemáticas.

01

INDÍGENAS EN ALC:
CARACTERIZACIÓN
SOCIO-ECONÓMICA

En la región viven alrededor de 826 pueblos indígenas de diverso origen étnico, cultural y lingüístico¹ (CEPAL, 2014). La población total indígena se calcula en aproximadamente 53.41 millones, lo que representa el 9.8% del total de la región. Los países con la mayor cantidad de pueblos indígenas son Brasil (305), seguido de Colombia (102), Perú (85) y México (78). En términos absolutos, la mayor cantidad de población indígena se encuentra en México (25,7 millones), Perú (7,6 millones) y Guatemala (6,5 millones). En términos relativos al total de su población, los países con mayor proporción de población indígena son Bolivia (41,5%) y Guatemala (43,6%; CEPAL, 2020). Sin embargo, estas cifras de población representan sólo una parte de la población indígena latinoamericana pues corresponden a los 21 países con información disponible. Varios países

del Caribe no han incluido variables de reconocimiento étnico en sus censos nacionales, por lo cual no disponen de esta información. Entre ellos se encuentran Bahamas, Barbados, República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, y otros. En Suramérica el país sin información disponible para pueblos indígenas es Surinam, ya que el sistema legislativo no reconoce estos pueblos (IWGIA, 2021). Además, en la región hay pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI) de los cuales se desconoce el tamaño exacto de su población. Se estima que solamente en la Amazonía podría haber entre 70 (RAISG, 2018) y 200 PIACI (OTCA, 2018). La Tabla 1 muestra en mayor detalle los datos de población con base en los censos nacionales más recientes de cada país.

Tabla 1. Población indígena por país según los últimos censos nacionales del decenio 2010

País	Año del último censo	Población total	Población indígena	Proporción del total de la población
Argentina	2.010	40.117.096	955.032	2,4%
Belice	2.010	322.424	46.725	14,5%
Bolivia	2.012	10.059.856	4.176.647	41,5%
Brasil	2.010	190.755.799	896.917	0,5%
Chile	2.017	17.574.003	2.175.873	12,4%
Colombia	2.018	43.309.477	1.905.617	4,4%
Costa Rica	2.011	4.301.712	104.143	2,4%
Ecuador	2.010	14.483.499	1.018.176	7,0%
El Salvador	2.007	5.744.113	13.310	0,2%

¹ Esta es la estimación que hace la CEPAL (2014) para el total de pueblos indígenas en la región, sin tener en cuenta los pueblos indígenas de Guyana y Surinam que son alrededor de 25: Akawaio, Akurio, Alamayana, Apalai, Arekuna, Kali'ña, Katuena/Tunayana, Lokono, Makushi, Maraso, Mawayana, Okomoyana, Pahikweneh, Patamona, Pireuyana, Sakta, Sikiiyana, Sirewu, Teko, Trio (Tirio, Tareno), Wai Wai, Wapichan, Warao, Wayana y Wayãpi (IWGIA, 2021).

Guatemala	2.018	14.901.286,00	6.491.199	43,6%
Honduras	2.013	8.303.771,00	646.244	7,8%
México	2.015	119.530.753,00	25.694.928	21,5%
Nicaragua	2.005	5.142.098,00	321.753	6,3%
Panamá	2.010	3.405.813,00	417.559	12,3%
Paraguay	2.012	6.435.218,00	117.150	1,8%
Perú	2.017	29.381.884,00	7.628.308	26,0%
Trinidad y Tobago	2.011	1.240.300,00	1.394	0,1%
Uruguay	2.011	3.251.654,00	76.452	2,4%
Venezuela	2.011	27.227.390,00	724.592	2,7%
Total		545.488.146,00	53.412.019	9,8%

Fuente: Censos nacionales Belice (2010) y Trinidad y Tobago (2011); Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2020. Los pueblos indígenas de América Latina- Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial. Santiago, Chile: United Nations.

Para muchos países las mediciones de población indígena no son comparables a lo largo del tiempo, de manera que es difícil establecer tendencias confiables de crecimiento y composición demográfica.

Esto se debe principalmente a que las categorías censales para la población indígena han cambiado: mientras antes se usaba la clasificación étnica o racial dada por el encuestador, desde la década de 2000 la mayoría de países latinoamericanos ha incluido el reconocimiento étnico dado por la autoidentificación, la lengua o la pertenencia a organizaciones indígenas (Banco Mundial, 2015). Incluso, estas formas heterogéneas de medición y clasificación de los datos complejizan

las comparaciones entre países. Por una parte, esto se debe a que no hay una categoría estandarizada que permita tener el mismo criterio de recolección de datos poblacionales sobre indígenas en la región y que, posteriormente, facilite las comparaciones directas. Por otra parte, incluso si existiera una categoría única para la medición de esta población, las formas de interpretación de esta categoría podrían variar contextualmente y eso también afectaría las posibilidades de comparación de la población indígena de diversos países. En la Tabla 2 se puede ver la heterogeneidad de categorías estadísticas para identificar a las poblaciones indígenas y los países que las usan.

Tabla 2. Categorías de identificación indígena en estadísticas nacionales después del 2000 y países (censos y encuestas)2010

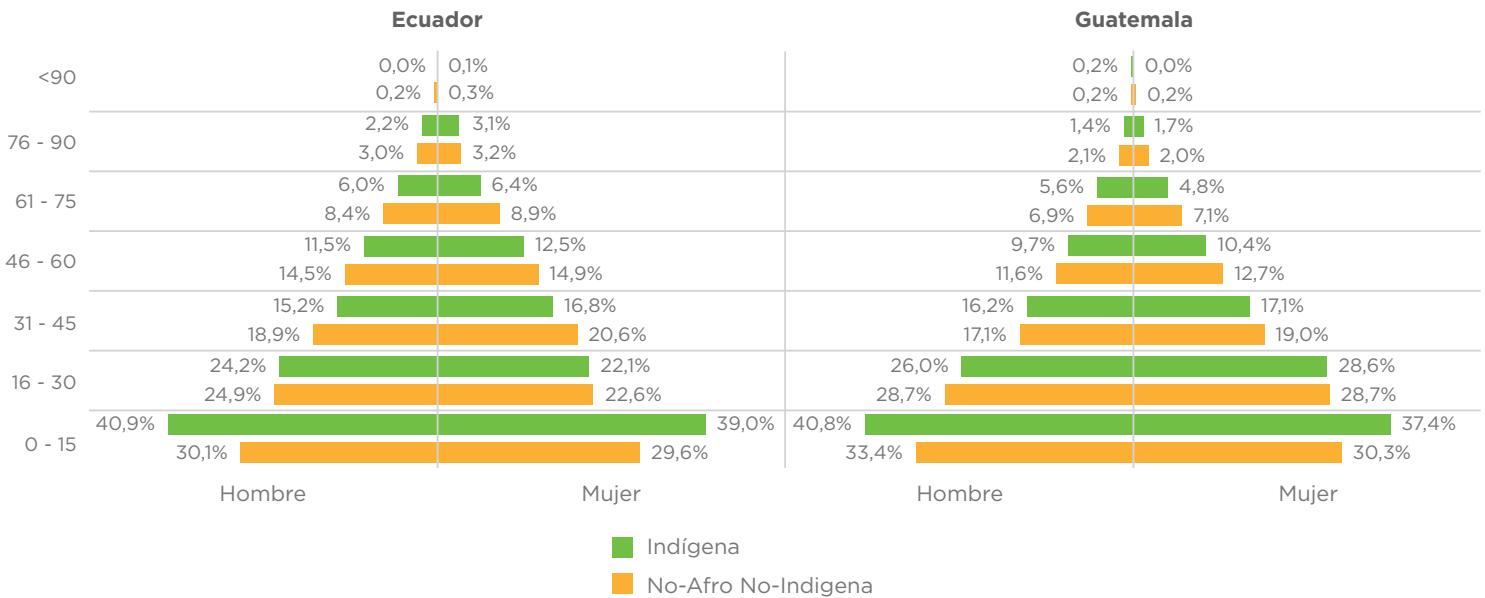
Autoidentificación	Lengua ² materna/ Idioma materno	Lengua hablada/ Idioma hablado	Idioma hogar	Ascendencia indígena
Argentina	Bolivia	Bolivia	Paraguay	Argentina
Bolivia	Costa Rica	Costa Rica		
Brasil	Guatemala	Colombia		
Chile	Perú	Ecuador		
Costa Rica		Guatemala		
Colombia		México		
Cuba		Nicaragua		
Ecuador		Paraguay		
El Salvador		Venezuela		
Guatemala				
Honduras				
México				
Nicaragua				
Panamá				
Paraguay				
Perú				
Uruguay				
Venezuela				

Adaptado de: CEPAL, 2008: 24.

Los pueblos indígenas en la región suelen ser más jóvenes que la población no-indígena. En el gráfico 1, que corresponde a datos recientes de las encuestas de hogares de Ecuador y Guatemala, se puede ver que la proporción de niños y niñas en las poblaciones indígenas es significativamente mayor que en la población no-indígena. Esta distribución se debe principalmente a la mayor Tasa Global de Fecundidad

(TGF) de las mujeres indígenas. Para Ecuador en el 2010 la TGF era 3,9 en mujeres indígenas frente a 2,6 de las no indígenas; para Guatemala en 2008 la TGF era de 5,0 vs 3,4, respectivamente (CEPAL, 2014). Estos resultados pueden explicarse por las lógicas culturales de los pueblos indígenas, pero también por las diferencias en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva³.

Gráfico 1. Pirámides Demográficas de Ecuador y Guatemala.



Fuente: Cálculos de SCL base del Banco de Datos Armonizado de Las Encuestas de Hogares del Sector Social

² Diferentes instituciones, como la CEPAL (2019), las Naciones Unidas y Unicef (2011) no recomiendan incluir la variable lengua como proxy de la identificación étnica porque excluye a aquellas personas que nunca aprendieron el idioma por diferentes motivaciones contextuales.

³ Sin embargo, para proveer una explicación más certera de las dinámicas demográficas de la población indígena es necesario un estudio cualitativo que permita conocer a profundidad los factores culturales involucrados.

02. INDÍGENAS EN CONTEXTOS RURALES Y URBANOS

Territorio y tenencia de la tierra

Muchos de los derechos colectivos indígenas relacionados con el autogobierno, el uso de la lengua, el consentimiento libre, previo e informado, el reconocimiento de los sistemas jurídicos y sus modos de vida y cultura, entre otros, se han enmarcado en la consolidación de derechos territoriales, principalmente en contextos rurales. Más del 49% de la población indígena de la región vive en zonas rurales, con diferencias entre países. Los países con mayor proporción de población indígena rural en América Latina son Honduras, Ecuador y Colombia con 85%, 79% y 78% de indígenas rurales, respectivamente. Por su parte, los países con menor proporción de población indígena rural son Uruguay, Argentina y Chile con 3,6%, 18,2% y 19,5% (Banco Mundial, 2015; CEPAL, 2020).

La tenencia y la titulación de la tierra son aspectos claves para la subsistencia de los pueblos indígenas, especialmente en las zonas rurales de América Latina. Por ello, 14 países⁴ de la región ratifican el Convenio 169 de la OIT que, entre otros temas, reconoce las relaciones estrechas entre los pueblos indígenas y las tierras, y prioriza la protección de los derechos de propiedad y posesión de estos pueblos (OIT, 2014). Así, una de las políticas centrales para distintos gobiernos ha sido la titulación de tierras colectivas para los pueblos indígenas, aunque este proceso ha sido complejo y no se sabe con exactitud cuántos territorios indígenas titulados hay en la región. Colombia es el país con mayor cantidad de tierras indígenas tituladas en la región, pues existen actualmente más de 700 resguardos indígenas que cubren una cuarta parte del territorio nacional (IWGIA, 2022: 380). Brasil es el segundo país con más tierras indígenas en América Latina (505), y el primero con mayor extensión territorial titulada a pueblos indígenas: 106,7 millones de hectáreas que cubren el 12,5% del territorio nacional. Sin embargo,

el proceso de titulación no ha sido fácil y el gobierno actual de este país ha manifestado abiertamente su oposición a continuar la titulación, lo cual ha tenido un fuerte impacto en el aumento de la deforestación en las zonas donde habitan muchos pueblos indígenas (IWGIA, 2021: 357).

Otros casos más complejos de titulación para los pueblos indígenas han sido, por ejemplo, los de Costa Rica y Venezuela, donde la legislación reconoce los derechos de los pueblos indígenas, pero los gobiernos no han desarrollado una delimitación efectiva de sus tierras (IWGIA, 2021). En Costa Rica se adjudicaron 24 territorios indígenas desde 1950 pero hasta el momento no se ha realizado el saneamiento de las tierras. Es decir que, si bien los territorios están legalmente reconocidos, el gobierno no ha realizado el proceso de expropiación e indemnización de las tierras no indígenas dentro de sus perímetros. Esto ha generado un alto grado de vulnerabilidad de los pueblos indígenas costarricenses frente a la invasión y el despojo por parte de otros actores (IWGIA, 2021: 390). Por su parte, en Venezuela la débil delimitación de los territorios indígenas ha facilitado la fragmentación de estos, ya que el gobierno no ha brindado las garantías legales para protegerlos frente a proyectos extractivos. Es más, se estima que el 85% de las tierras indígenas en Venezuela carecen de demarcación (IWGIA, 2021: 502).

En la región todavía hay varios países que no reconocen los derechos de los pueblos indígenas sobre la tenencia de la tierra, lo cual representa una amenaza para su bienestar y supervivencia (IWGIA, 2021). Este es el caso de Surinam donde no hay una legislación que regule los derechos indígenas de propiedad. Por ello, muchos pueblos de este país son vulnerables frente a la explotación de recursos como el petróleo, la bauxita, el oro, el agua, entre otros (IWGIA, 2021: 490).

⁴ Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela (OIT, 2014).

Más allá de la tenencia de la tierra

Una mirada integral de los derechos territoriales de los pueblos indígenas supone caracterizar diversas variables que van más allá de la tenencia de la tierra. Se cuenta con poca información desagregada a nivel de país para estas variables. Entre ellas se incluyen: el reconocimiento de tierras colectivas y de los derechos indígenas originarios de propiedad; la protección especial de las tierras; las estrategias de control de los recursos naturales en las tierras comunitarias; la delimitación y titulación de las tierras indígenas; las normatividades que permitan la ampliación de las tierras indígenas de acuerdo con sus necesidades propias de desarrollo; el reconocimiento del derecho de los indígenas a no ser desplazados de sus territorios, y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y la autonomía (CEPAL, 2020: 40)⁵. Estas variables se relacionan con el reconocimiento social y jurídico de las formas de gobernanza territorial de los pueblos. Además, los derechos territoriales de los pueblos indígenas pueden estar afectados por conflictos territoriales entre pueblos, algunos en zonas fronterizas, y también con otros grupos como campesinos o afrodescendientes (Agudo, 2007; Arisi, 2010; Arisi, 2012). Es también importante destacar la persistencia de problemas en el acceso y distribución de la tierra de las mujeres indígenas, sujetas a leyes consuetudinarias y creencias tradicionales que favorecen a los hombres (Deere et. al, 2011).

Retos de los indígenas en las ciudades

Los indígenas han migrado hacia las zonas urbanas tanto voluntariamente como involuntariamente.

Para algunos pueblos la relación urbano-rural ha sido constitutiva de viejas y nuevas dinámicas culturales. Estas dinámicas campo-ciudad-campo hacen parte de migraciones estacionales en las que los indígenas maximizan oportunidades económicas, de educación o salud. Para casos como los Mapuche en Chile se argumenta que “la ciudad participa plenamente de las dinámicas territoriales que animan el mundo mapuche” (Sepúlveda y Zúñiga, 2015). Es decir que, a pesar de migrar a las ciudades, los indígenas no suelen perder su conexión con sus comunidades de origen, ya que normalmente mantienen sus derechos adquiridos en el tiempo, tales como el usufructo de la tierra por herencia familiar, la participación en rituales o la inclusión en

mecanismos de reciprocidad, entre otros. Hoy en día el crecimiento de la población indígena en el ámbito urbano no es resultado sólo de la migración desde áreas rurales sino del nacimiento de indígenas en las ciudades. Algunas razones que han contribuido históricamente a la migración de los indígenas a las ciudades son el despojo de sus tierras, el desplazamiento por violencia, la pobreza, la militarización, los desastres naturales, la falta de oportunidades de empleo, “la expulsión socio económica de la población más joven; deterioro de los recursos productivos (escasez y baja productividad de la tierra) y la incapacidad del sistema agrario regional para absorber la creciente población indígena” (Naciones Unidas, 2008; López et. al, 2016: 9).

En los últimos años se ha podido identificar una creciente migración de los indígenas venezolanos hacia otros países de América del Sur.

Este es, por ejemplo, el caso de Brasil, donde hasta principios de 2020 se registró un total de 4.981 indígenas venezolanos migrantes. Los grupos étnicos que han presentado mayor migración desde Venezuela hacia Brasil son los Warao y Pemon que representan el 66% y el 30% de esta población indígena migrante, respectivamente. Del total de indígenas venezolanos en Brasil, más del 65% ha solicitado refugio en el país. La mayoría se ubica en la región amazónica y muchos de ellos viven en asentamientos espontáneos o carecen de hogar, lo cual incrementa su vulnerabilidad en cuanto al acceso a vivienda, saneamiento básico, servicios públicos, medios de vida y documentación legal. Esto se ha visto reflejado en que desde el 2017 hasta marzo del 2020 habían muerto 80 indígenas venezolanos en Brasil (ACNUR, 2020). Por su parte, en Perú se ha logrado identificar que de toda la población venezolana que ha ingresado al país en los últimos años, el 3,2% se autoreconoce como indígena (INEI, 2019). En Colombia también se ha presentado un fenómeno similar, pues algunos pueblos indígenas transfronterizos, como los Wayuu y los Yukpa, han retornado a La Guajira colombiana desde Venezuela. No se ha logrado identificar con exactitud cuántos indígenas venezolanos han migrado a Colombia en los últimos años, pero se sabe que muchos pueblos indígenas que habitan en el municipio de Maicao (Colombia) viven en condiciones de alta vulnerabilidad. Muestra de esto es que el 27,4% de los migrantes venezolanos que habitan en este municipio de Colombia vive en situación de calle y el 23,1% vive en asentamientos informales (ACNUR, 2019).

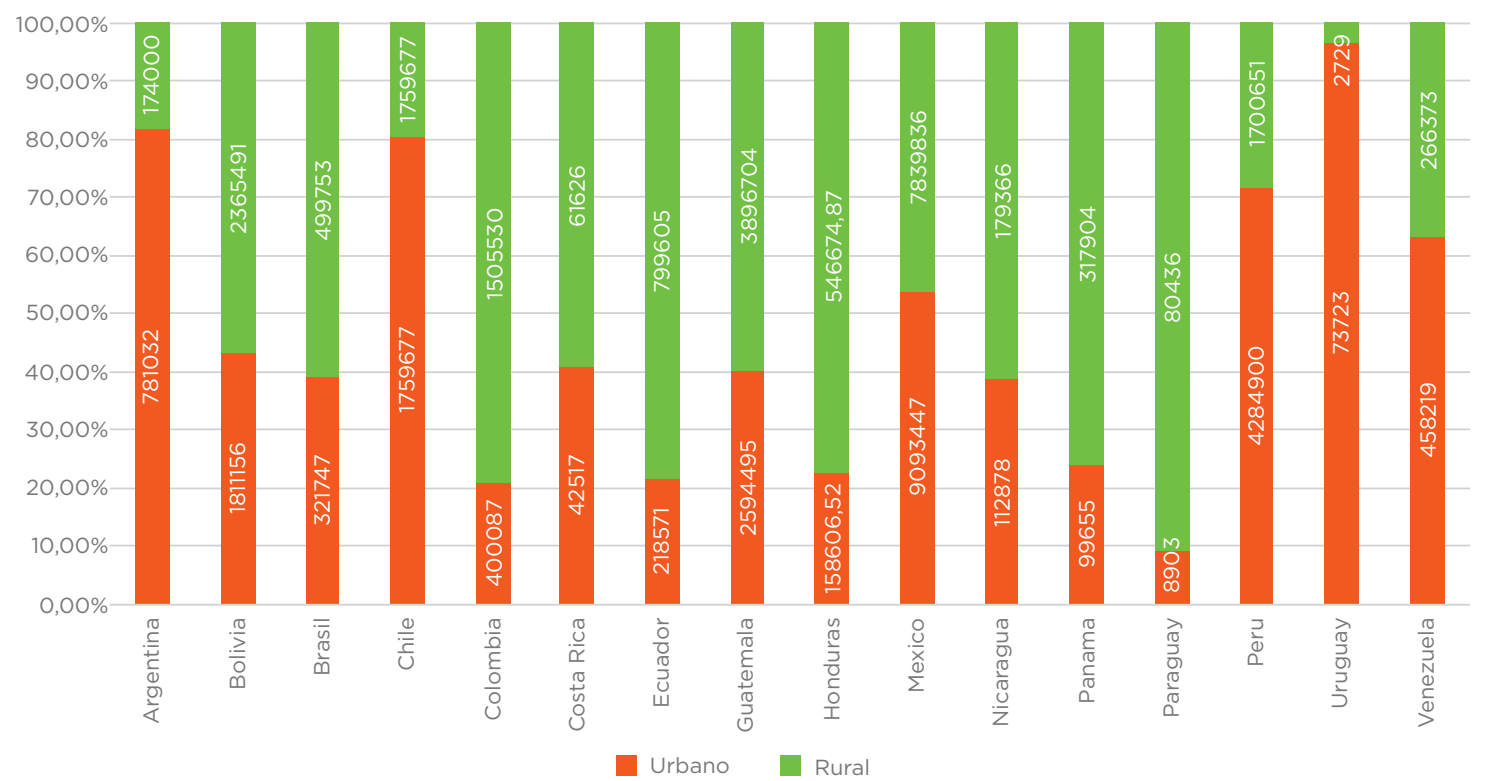
Se puede identificar una situación de creciente urbanización de los pueblos indígenas en la región

⁵ Otro de los marcos desde los cuáles se están comenzando a evaluar los derechos territoriales indígenas es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que se proponen “metas desde la perspectiva de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre el territorio” que incluyen: poner fin a la pobreza, lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible, lograr la igualdad de género, garantizar disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento, construir infraestructuras resilientes inclusiva y sostenible, combatir cambio climático, conservar océanos, ecosistemas terrestres, construir instituciones eficaces y justas (CEPAL, 2020: 18).

pues más del 50% de los indígenas viven en el ámbito urbano, con variaciones entre países (Banco Mundial, 2015). El Gráfico 2 presenta la distribución urbano-rural de la población indígena de la región. Hay seis países donde al menos 50% de la población indígena reside en zonas urbanas: Chile, Uruguay, Argentina, Perú, México y Venezuela. Se estima que este también es el caso en El Salvador (Banco Mundial, 2015). Por su parte, los países con menor porcentaje de indígenas

urbanos son Paraguay, Ecuador, Honduras, Panamá y Colombia, donde la proporción de indígenas urbanos sobre el total de la población indígena nacional no supera el 25% (Banco Mundial, 2015). Esta realidad supone un reto para los estados nacionales en el diseño y la implementación de políticas públicas que reconozcan los derechos indígenas de los pueblos que viven en contextos urbanos.

Gráfico 2. Población indígena en los ámbitos urbano y rural en América Latina



Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Indicadores Sociodemográficos de Poblaciones y Pueblos Indígenas (CELADE, 2020).

Marginalización y lugares vulnerables de habitación
En América Latina los indígenas que viven en zonas urbanas suelen habitar en barrios marginales y de extrema pobreza, donde se exponen a distintos riesgos de salud, violencia y desastres. Según la CEPAL (2014: 41), cerca de 15 millones de indígenas habitan en favelas, villas miseria, tugurios o barrios marginales. Esta cifra es más pronunciada en países como Venezuela y Nicaragua, donde el porcentaje de población indígena urbana que vive en asentamientos precarios es de 51% y 69%, respectivamente (Banco

Mundial, 2015). Además, los indígenas suelen habitar en viviendas inadecuadas donde tienen condiciones de infraestructura y acceso a servicios deficientes. Por ejemplo, en países como Brasil, El Salvador y Panamá, sólo un poco más del 60% de la población indígena tiene acceso a alcantarillado (Banco Mundial, 2015). En países como Colombia, El Salvador, Honduras y Venezuela, el porcentaje de población indígena urbana que carece de agua potable oscila entre el 18% y el 29% (Banco Mundial, 2015). Por otra parte, los indígenas que viven en las ciudades enfrentan regularmente más

dificultades para tener vivienda propia. En Bolivia el 90% de los indígenas rurales posee vivienda propia, mientras que sólo el 61% de los indígenas urbanos se encuentra en la misma condición (Banco Mundial, 2015: 41). Algo similar ocurre en Brasil y Ecuador, donde la brecha de tenencia de vivienda propia entre indígenas rurales y urbanos es de 21 y 34 puntos porcentuales, respectivamente (Banco Mundial, 2015: 41).

La dificultad de tener vivienda o tierra propia para los indígenas urbanos obstaculiza su acceso a lugares permanentes de habitación (Banco Mundial 2015: 42). Esto también se ha podido evidenciar en que muchos de los indígenas urbanos viven en hospedajes de paso o, incluso, en condición de calle (Horbath y García, 2018; Banco Mundial, 2015). La situación de estos grupos es todavía más precaria porque las instituciones públicas no incluyen regularmente a las personas que viven en hospedajes transitorios o en condición de calle dentro de los censos poblacionales ni dentro de la población objetivo de políticas públicas diferenciales.

Movilización transfronteriza

La movilización de los pueblos transfronterizos se desarrolla tanto en zonas urbanas como rurales, lo cual, en ciertos casos, aumenta la vulnerabilidad en su reclamo de derechos por la falta de reconocimiento en el país receptor. Estos pueblos no migran únicamente por coyunturas sociales o políticas, sino que habitan en áreas de frontera y se movilizan constantemente entre países porque sus ámbitos territoriales y redes comunitarias suelen ser más amplias que las fronteras nacionales. Una muestra de esto es que casi 2.500 personas que se autoidentificaron como indígenas durante el censo de 2018 en Colombia reportaron nacionalidad ecuatoriana (DANE, 2018). Por su parte, durante el último censo en Argentina se registraron más de 32 mil indígenas de nacionalidad boliviana, cerca de 10.400 de nacionalidad chilena y más de 13 mil de nacionalidad paraguaya (INDEC, 2010). En Chile los indígenas que nacieron en Brasil o Paraguay suman más de mil personas (INE, 2017). De los pueblos Quechua y Aymara en Perú, 2.125 indígenas son de

nacionalidad argentina, 1.452 de nacionalidad boliviana, 1.698 chilenos y 452 brasileños (INEI, 2017).

La situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas transfronterizos “se exacerba en escenarios de ausencia y desatención del Estado —como las zonas de frontera— y de lejanía de las redes familiares y comunitarias. En este sentido, el reconocimiento de los migrantes internacionales indígenas como sujetos de protección resulta un elemento primordial en la promoción de sus derechos, con especial atención a la situación de las mujeres —cuya vulnerabilidad viene dada por su triple condición de migrantes, indígenas y mujeres— y de las niñas y niños” (CEPAL, 2014: 14).

En muchos casos, la migración internacional de los pueblos indígenas está asociada con procesos de precariedad laboral y discriminación. La alta movilidad histórica de indígenas mexicanos a Estados Unidos ha estado vinculada con esquemas laborales precarios, sobre todo en el sector agrícola, que ofrecen trabajos de alta demanda de esfuerzo físico pero de baja remuneración monetaria. Además, esos indígenas migrantes —principalmente popolocas, mixtecos, purépechas, nahuas, mayas y zapotecos— se enfrentan a procesos de doble discriminación en el país receptor por ser mexicanos e indígenas. Por lo tanto, muchos indígenas mexicanos migrantes en Estados Unidos han consolidado organizaciones para la defensa de sus derechos y han construido redes familiares para garantizar su protección y vinculación laboral (Sánchez, 2015).

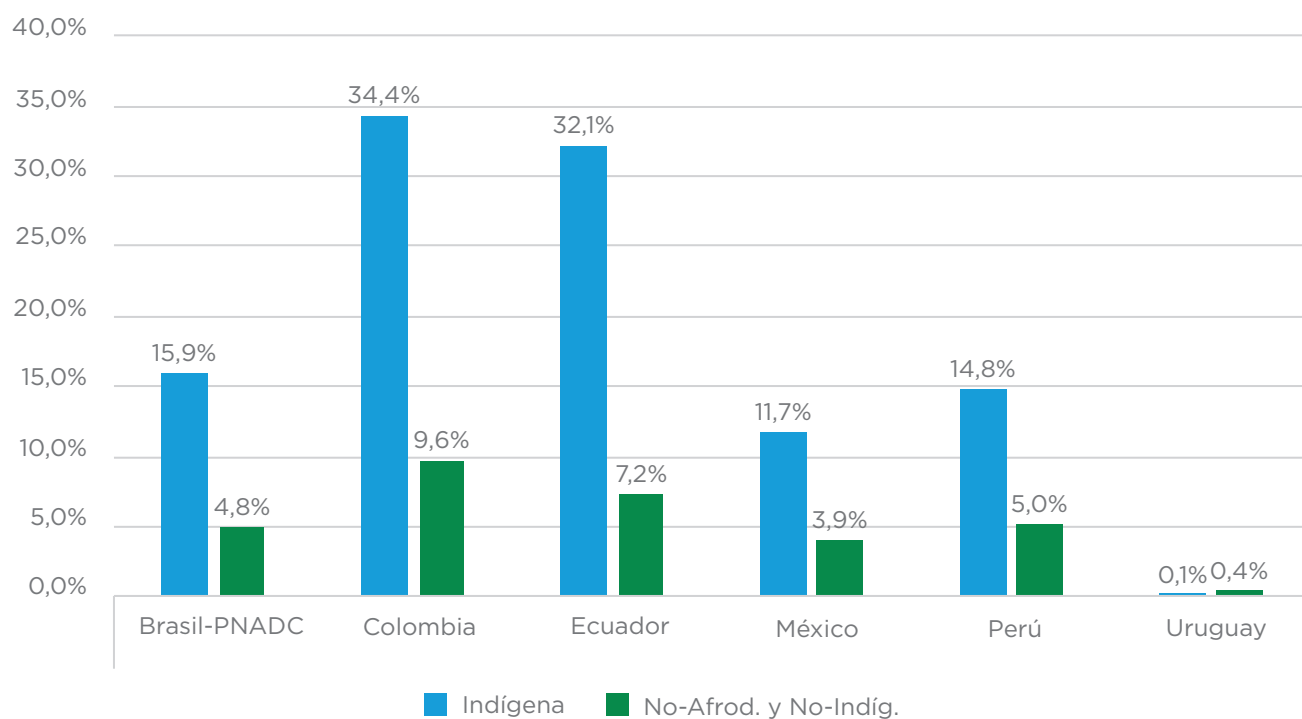
En Bolivia las personas más vulnerables frente a la trata de personas para explotación sexual y laboral suelen ser indígenas (principalmente rurales y pobres). Mientras que las mujeres y niñas bolivianas suelen sufrir la explotación sexual en países vecinos, los hombres y niños son víctimas de trabajo forzado al interior del país en labores tales como la minería, la ganadería y la agricultura (U.S. Department of State, 2021: 131).

03. POBREZA POR INGRESOS

Persisten grandes desigualdades económicas entre las personas indígenas y no indígenas en la región. Estas desigualdades son visibles en múltiples dimensiones. Resaltan algunas de las discriminaciones que aún enfrentan los indígenas tanto en contextos urbanos como rurales. En todos los países de la región

para los que hay datos sobre el nivel de ingresos de la población con fecha de corte a 2015, los niveles de pobreza de los indígenas fueron más altos que los de la población no indígena (Gráfico 3). El único país en donde no se observó esta brecha es Uruguay.

Gráfico 3. Diferencias en la pobreza extrema (\$3.20 2011 PPP/día) entre pueblos indígenas y no indígenas, 2018



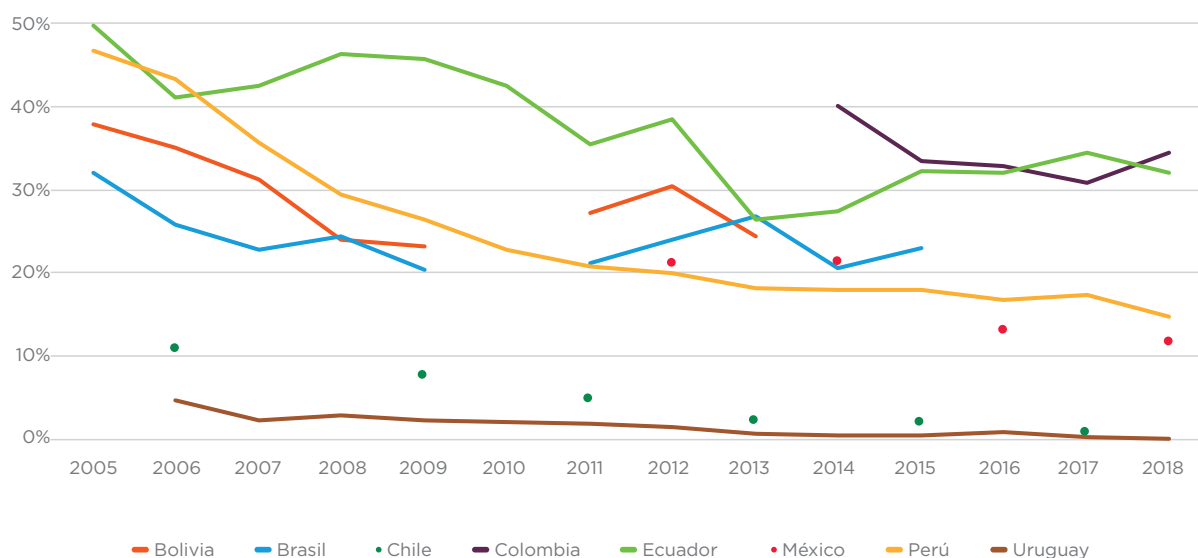
Fuente: Elaboración propia. Datos LAC Equity Lab, World Bank, 2018.

La situación de pobreza en pueblos indígenas mostró una tendencia decreciente entre 2005 y 2018, al igual que para el total de la población de la región.

Sin embargo, esta reducción de la pobreza no fue de la misma magnitud que en poblaciones no indígenas y no afrodescendientes. En general, la reducción de la pobreza entre poblaciones no indígenas ha sido

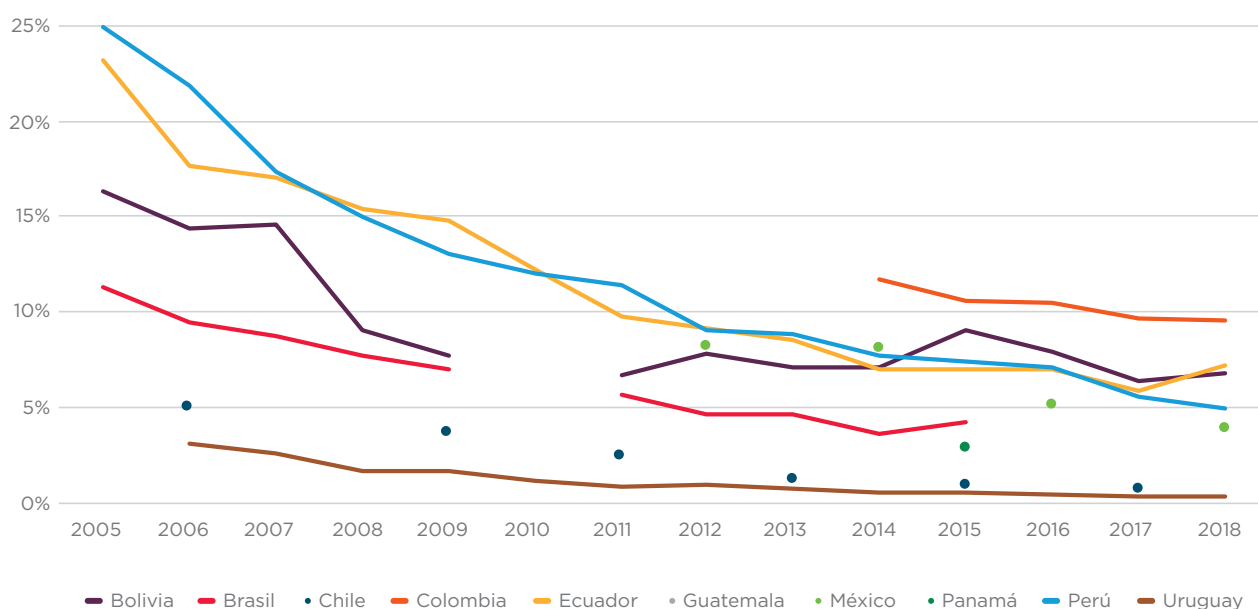
más persistente y acelerada, como se puede ver en los Gráficos 4 y 5. Por ejemplo, en el caso de Perú la pobreza indígena se redujo a la tercera parte: de 45% a 15%. Mientras tanto, entre los no indígenas y no afrodescendientes la reducción fue más pronunciada, pues ésta cayó a la quinta parte, pasando de 25% en 2005 a 5% en 2018.

Gráfico 4. Evolución de la pobreza por ingresos (\$3.2 USD) en poblaciones indígenas



Fuente: Elaboración propia. Datos LAC Equity Lab, World Bank, 2020.

Gráfico 5. Evolución de la pobreza por ingresos (\$3.2 USD) en población no indígena y no afrodescendiente



Fuente: Elaboración propia. Datos LAC Equity Lab, World Bank, 2020.

El género es una variable que amplía la magnitud de la trampa de pobreza en los países de la región. En Ecuador y Bolivia, los hogares indígenas con jefatura femenina tienen 5,81% y 3,56% más de probabilidades de ser pobres (o de tener un ingreso inferior a \$4 USD al día por hogar). Además, la brecha salarial entre las mujeres indígenas y las no indígenas es de gran magnitud. Por ejemplo “las indígenas bolivianas ganan alrededor de 60% menos que las mujeres no indígenas por el mismo tipo de trabajos” (Banco Mundial, 2015: 11).

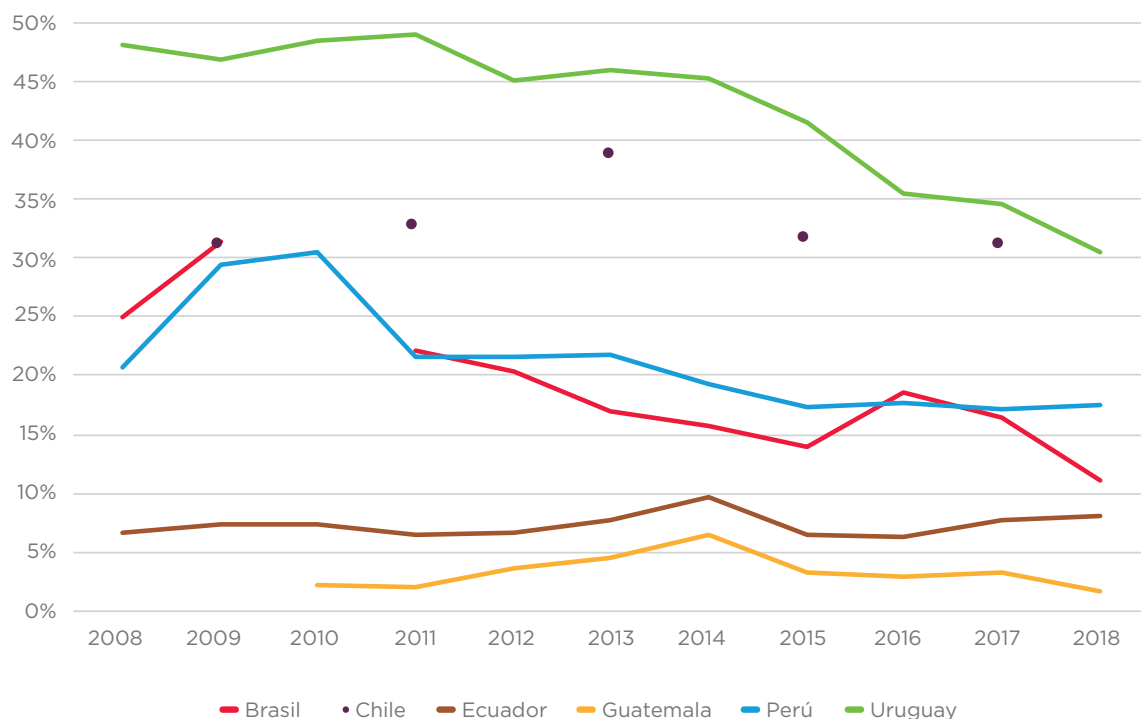
Población indígena de ingresos medios y altos

Otro indicador de las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas en América Latina para superar la pobreza es el bajo porcentaje de personas indígenas que tienen ingresos medios o altos. Por ejemplo, en Brasil para 2018 sólo el 11,2% de la población indígena tenía ingresos medios⁶, 12 puntos porcentuales menos que sus pares no indígenas y no afrodescendientes (SCL, Base Armonizada Encuestas de Hogares). Para el mismo año en Ecuador sólo un poco más del 8% de la población indígena tenía ingresos medios, casi 16 puntos porcentuales menos que sus pares no indígenas y no afrodescendientes. En otros países, como Guatemala, el porcentaje de personas indígenas con ingresos medios no superaba el 2% de la población indígena

total, mientras que alrededor del 12% de la población no indígena y no afrodescendiente registraba ingresos medios.

Un patrón similar se observa con respecto al porcentaje de indígenas que tienen un nivel de ingreso alto⁷. Para el 2018, este porcentaje era menos del 1% en Perú, Uruguay, Ecuador y Guatemala. Aunque la población no indígena y no afrodescendiente tampoco presenta tasas muy elevadas de ingresos altos en los países de la región, sí se puede observar que el porcentaje de esta población en un nivel alto de ingresos puede ser entre tres y ocho veces más que el de la población indígena, aproximadamente. Por ejemplo, durante el 2018 en Brasil sólo el 1,3% de la población indígena tuvo ingresos altos, mientras que el 3,1% de los no indígenas y no afrodescendientes se ubicó en ese mismo nivel. En Chile se presenta una diferencia similar, ya que en el 2017 sólo el 1,6% de los indígenas registró ingresos altos, mientras que el 4,8% de la población no indígena y no afrodescendiente lo hizo (SCL, Base Armonizada Encuestas de Hogares). En los gráficos 5 y 6 se puede observar que esta situación no ha mejorado en los últimos años; por el contrario, el porcentaje de personas indígenas en ingresos medios y altos se redujo en algunos países incluso antes de la pandemia.

Gráfico 6. Evolución de personas indígenas en AL con ingresos medios

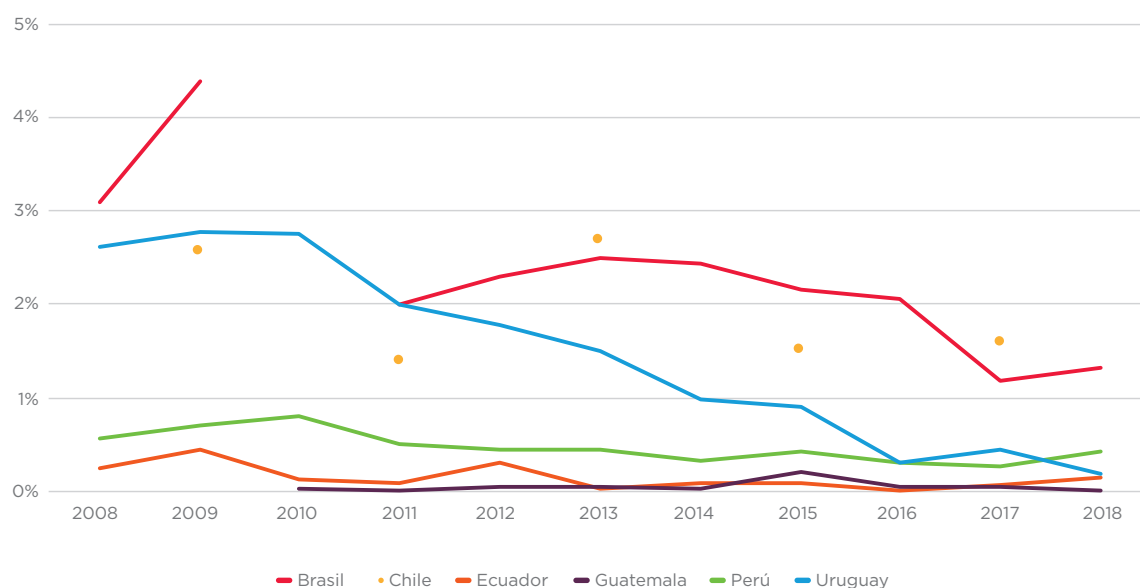


Fuente: Cálculos de SCL base del Banco de Datos Armonizado de Las Encuestas de Hogares del Sector Social

⁶ Ingresos entre \$12.40 y \$62.00 USD per cápita por día.

⁷ Ingresos mayores a \$62.00 USD per cápita por día.

Gráfico 7. Evolución de personas indígenas en AL con ingresos altos



Fuente: Cálculos de SCL base del Banco de Datos Armonizado de Las Encuestas de Hogares del Sector Social

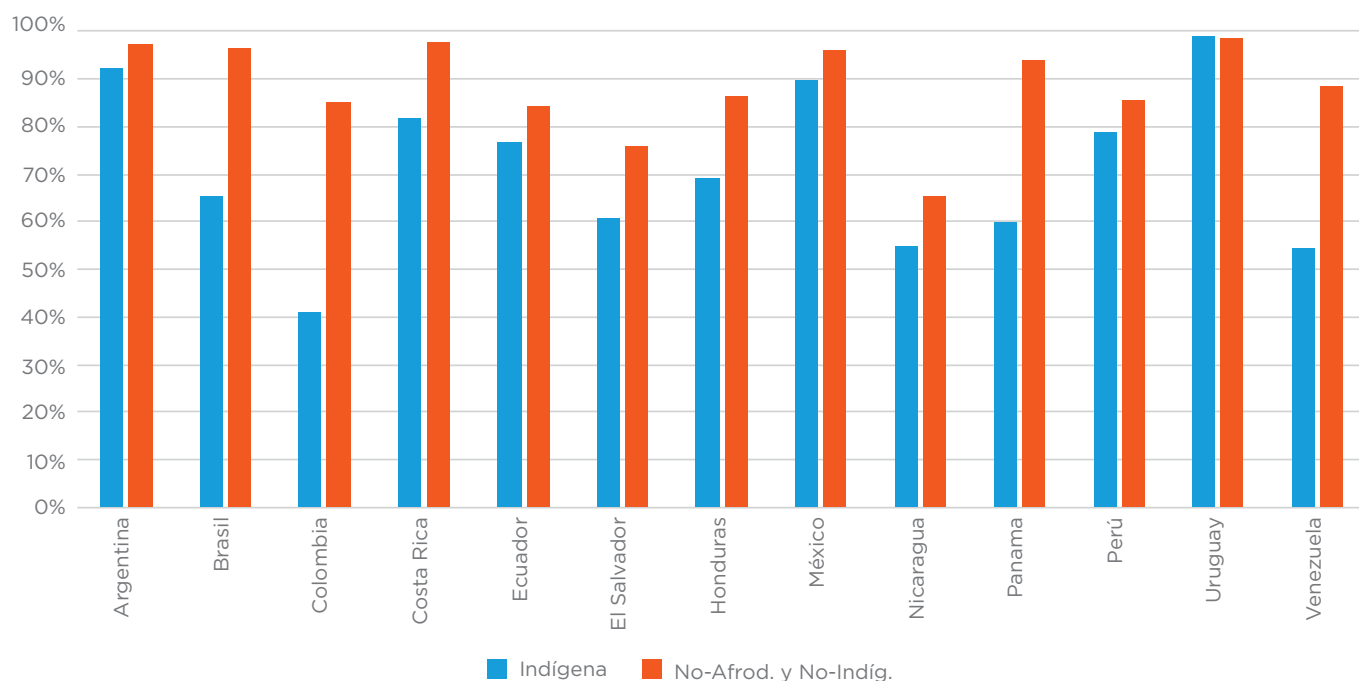
04. ACCESO A SERVICIOS

Agua

En casi todos los países de América Latina son evidentes las grandes desigualdades en el acceso al agua corriente potable entre los pueblos indígenas y la población no indígena. Estas desigualdades son particularmente marcadas en Colombia y Venezuela, donde la brecha de acceso al agua es de alrededor de 44 y 34 puntos porcentuales, respectivamente

(Gráfico 4). No obstante, países como Argentina y Uruguay muestran una brecha menor: en el primer caso la brecha entre un grupo y otro es de un poco más de cinco puntos porcentuales; en el segundo caso, las poblaciones indígenas tienen una mayor cobertura de acceso al agua por poco menos de 0,1 pp. Esto se puede deber a que estos son los países de mayor urbanización en la región (Banco Mundial, 2015).

Gráfico 8. Acceso al agua poblaciones no indígenas ni afrodescendientes y poblaciones indígenas en América Latina



Fuente: Elaboración propia. Datos LAC Equity Lab, World Bank, 2020.

Existen diferencias en el acceso a agua corriente entre las poblaciones indígenas: los indígenas urbanos suelen tener más acceso a agua que los indígenas rurales. En promedio para 12 países de la región, cerca del 88% de los indígenas urbanos tiene acceso a agua corriente, 33 puntos porcentuales más que los indígenas rurales (Banco Mundial, 2020). Los países que presentan una mayor diferencia en el acceso a agua corriente de los indígenas rurales en comparación con los indígenas urbanos son Brasil, Colombia, Nicaragua y Panamá, cuya tasa de acceso a agua corriente en indígenas rurales es entre 43 y 45 puntos porcentuales menor que en indígenas urbanos. Por su parte, los países que presentan una menor brecha en el acceso a este servicio entre indígenas rurales y urbanos son Honduras y México con diferencias de acceso de 9 y 14 puntos porcentuales, respectivamente (Banco Mundial, 2020).

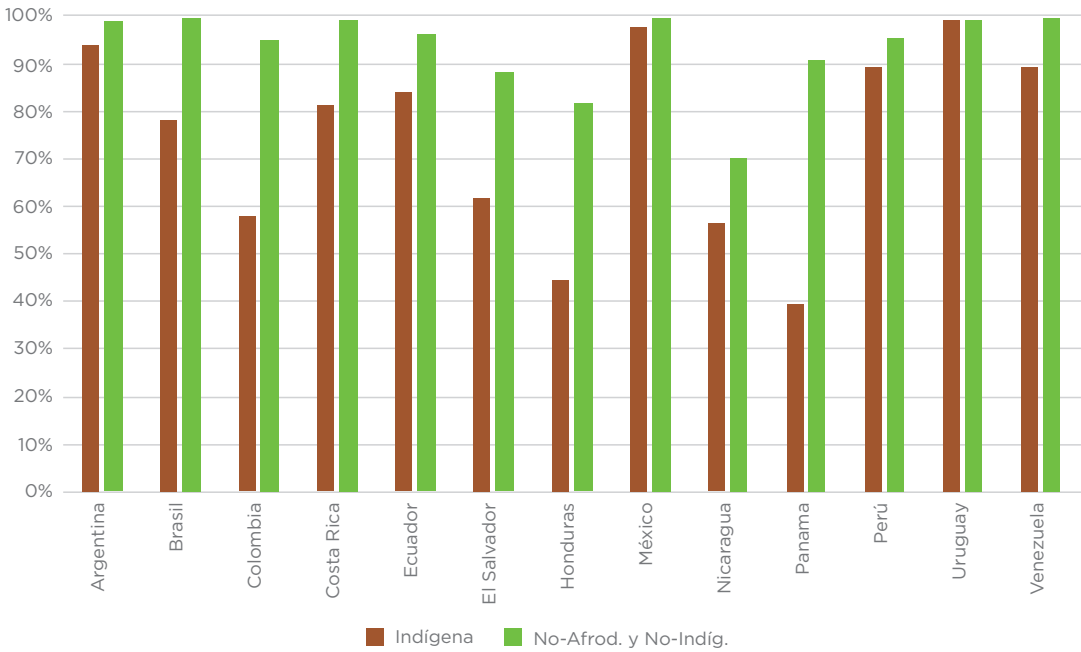
En promedio para cuatro países de América Latina (Bolivia, Brasil, Ecuador y Guatemala) las mujeres indígenas tienen una cobertura de acceso a agua corriente casi cinco puntos porcentuales superior en comparación con los hombres indígenas⁸. En países como Ecuador pareciera que la volatilidad en el acceso a agua año a año y las diferencias de género están estrechamente relacionadas con las brechas de ingresos, ya que en varios años los hogares indígenas con jefatura femenina presentan niveles más altos de

ingreso que los de jefatura masculina, a diferencia de los hogares no étnicos con jefatura masculina que siempre tienen mayores ingresos. Esto es consistente con un estudio que muestra cómo las jefas de hogar indígenas de la zona urbana son más jóvenes y tienen menos niños a cargo en sus hogares en comparación con el promedio de mujeres indígenas jefas de hogar (Popolo et. al, 2007). Esto podría sugerir que las mujeres indígenas que viven en la zona urbana tienen unos perfiles particulares que afectan positivamente sus dinámicas laborales y así su nivel de ingreso y las posibilidades de acceso a servicios.

Electricidad

La brecha de acceso a la electricidad entre la población indígena y no indígena en América Latina es de 15 puntos porcentuales, en promedio (Banco Mundial, 2015). Específicamente, los promedios ponderados de la región muestran que un 82% de la población indígena tiene acceso a electricidad, mientras el 97% de la población no indígena tiene acceso a este servicio. Esta brecha muestra diferencias entre países: México presenta una brecha de menos de 2 puntos y Uruguay de 0,09 puntos porcentuales. Por su parte, países como Colombia, Honduras y Panamá tienen brechas más amplias en el acceso a electricidad, pues los pueblos indígenas tienen entre 36 (en los primeros dos casos) y 51 puntos porcentuales (en el tercer caso) menos acceso a este servicio.

Gráfico 9. Acceso electricidad poblaciones no indígenas ni afrodescendientes y poblaciones indígenas en América Latina



Fuente: Elaboración propia. Datos LAC Equity Lab, World Bank, 2020.

⁸ Cálculos de SCL base del Banco de Datos Armonizado de Las Encuestas de Hogares.

El problema de acceso a electricidad es mucho más acentuado en las poblaciones indígenas rurales que en sus pares urbanos. En promedio para 12 países de la región, 95% de los indígenas urbanos y 59% de indígenas rurales tienen acceso a electricidad. Esta diferencia es más amplia en países como Panamá y El Salvador, donde la brecha es de 69 y 54 puntos porcentuales, en detrimento de los indígenas rurales. Por el contrario, esta brecha es mucho más reducida en México, donde la diferencia de acceso es menor a cinco puntos porcentuales.

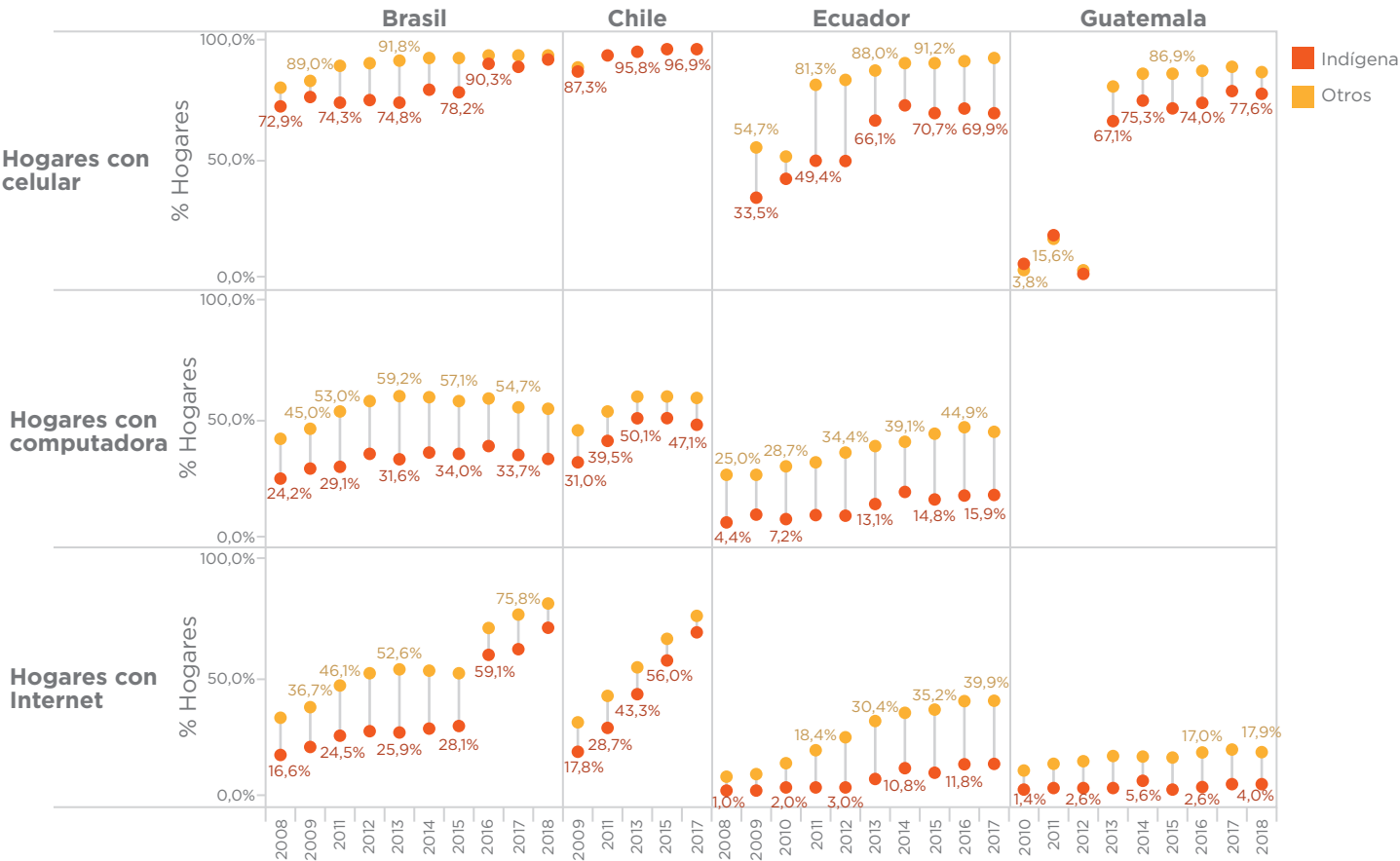
Internet, celulares y computadoras

En Brasil, Ecuador, Guatemala y Chile, se destaca la evolución entre 2008 y 2018 de las brechas en el acceso a celulares, computadoras e internet entre hogares indígenas y hogares no-indígenas y no afrodescendientes (Gráfico 10). Estas brechas en inclusión digital pueden tener efectos adversos en hogares indígenas, especialmente en el contexto de la pandemia de la COVID-19 para el acceso a la

información, salud y educación virtuales, así como a otros servicios y negocios que se han trasladado al espacio digital.

En cuanto a la evolución en el acceso a celular se evidencia que, mientras Brasil y Chile desde el principio del periodo analizado ya presentaban niveles de acceso por encima de 70%, Ecuador y Guatemala han ido nivelando a través del tiempo a los hogares no indígenas y no afrodescendientes en el acceso a celulares con respecto a los otros países. No obstante, la población indígena sigue estando por debajo con respecto a los países en comparación. Por otra parte, el avance en el acceso a internet ha sido más acelerado en Chile y en Brasil⁹, en donde también se evidencia un cierre de las brechas entre hogares indígenas y no indígenas. El avance ha sido más lento en Ecuador y nulo en Guatemala, en donde las brechas entre los hogares indígenas y no indígenas se han ampliado (SCL, Base Armonizada Encuestas de Hogares).

Gráfico 10. Brechas de acceso a tecnologías digitales y electricidad



Fuente: Cálculos de SCL base el Banco de Datos Armonizado de Las Encuestas de Hogares del Sector Social

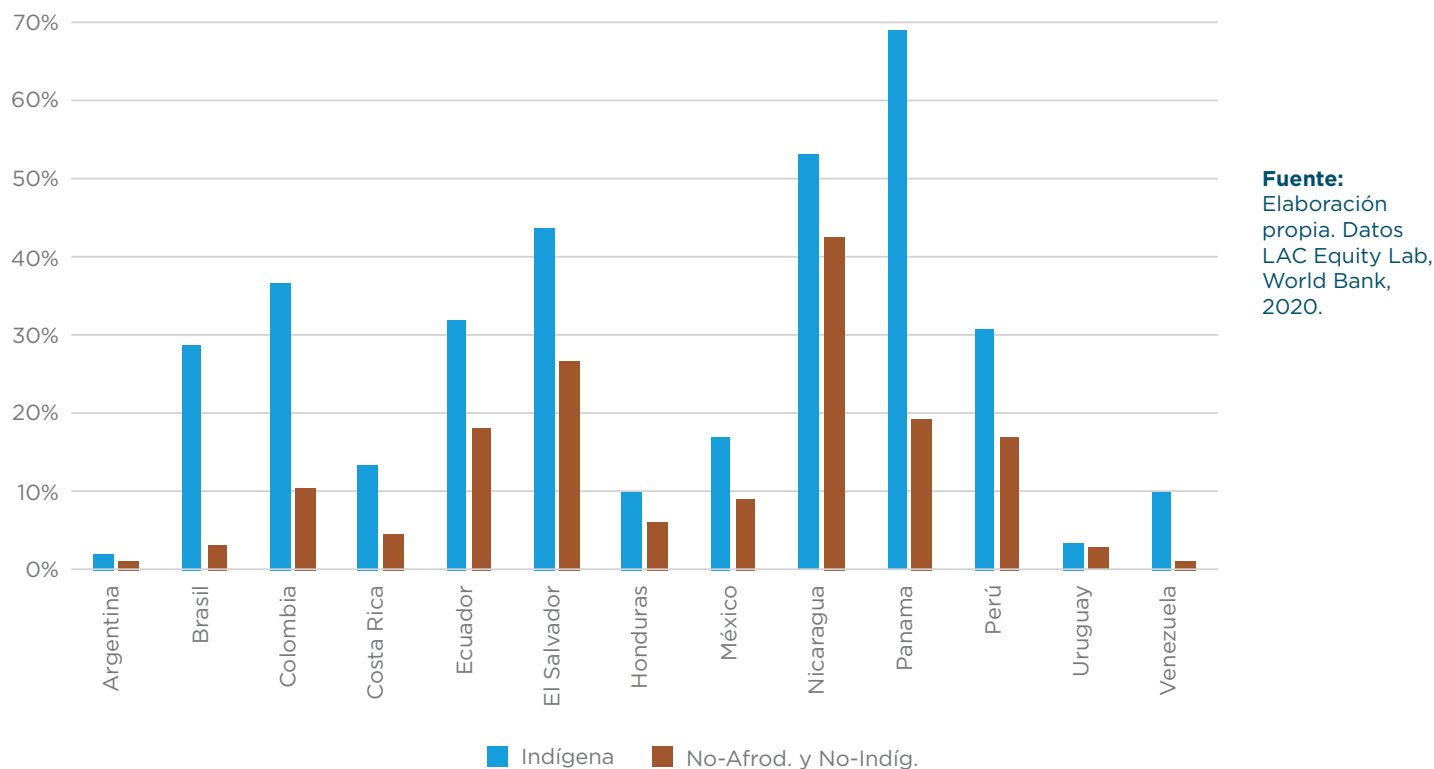
⁹ Es importante destacar que en 2016 la metodología de la encuesta PNAD de Brasil tuvo un cambio, lo cual podría explicar los saltos repentinos de 2015 a 2016, en estos y otros indicadores analizados.

Hacinamiento

El hacinamiento es otro indicador en el cual se observan brechas entre las poblaciones indígenas y no indígenas. En general, los países más urbanizados como Argentina y Uruguay muestran un alto porcentaje de hogares no hacinados tanto en poblaciones indígenas como en no indígenas. Otros países que presentan tasas similarmente altas (más del 85%) para ambas poblaciones son Costa Rica, Honduras y

Venezuela (Banco Mundial, 2020). Por su parte, los países con mayores brechas en cuanto a hacinamiento son Brasil, Colombia y Panamá, donde hay tasas de hacinamiento en hogares indígenas del 29%, 37% y 69%, respectivamente (Banco Mundial, 2020). Mientras tanto, para esos mismos países los hogares no indígenas y no afrodescendientes presentan un hacinamiento del 3% en Brasil, 11% en Colombia y 19% en Panamá (Banco Mundial, 2020).

Gráfico 11. Hogares hacinados en poblaciones no indígenas ni afrodescendientes y poblaciones indígenas en América Latina



El hacinamiento es más pronunciado en hogares indígenas rurales que en hogares indígenas urbanos.

En promedio para 12 países de la región, 80% de los hogares indígenas urbanos no se encuentran hacinados, comparado con 65% de los hogares indígenas rurales (Banco Mundial, 2020). Los países que presentan tasas bajas de hacinamiento y que tienen una menor diferencia entre hogares urbanos y rurales son Argentina y Venezuela, donde la tasa de hacinamiento es de menos de 11% para los hogares indígenas en ambas zonas y la brecha entre áreas rurales y urbanas es sólo entre dos y tres puntos porcentuales (Banco Mundial, 2020). Por su parte, el país con la brecha más amplia en términos de hacinamiento es Brasil, ya que presenta una tasa de hogares indígenas urbanos hacinados de 10%, 30 puntos porcentuales menor a la de los hogares indígenas rurales (Banco Mundial, 2020).

El hacinamiento se mide como la razón entre el número de personas en una vivienda y el número de habitaciones disponibles (Villatoro, 2017).

El umbral que determina que no hay hacinamiento en una vivienda es que no haya más de tres personas por habitación (Lozano-Gracia y Young, 2014). Esta forma de medición puede explicar que el hacinamiento sea mayor en zonas rurales que en zonas urbanas. Es importante tener en cuenta que, en poblaciones indígenas rurales, este indicador no necesariamente muestra condiciones de pobreza o falta de bienestar. Esto se debe principalmente a que las viviendas indígenas tradicionales en muchos casos carecen de la división privada del espacio (en habitaciones) y su noción de bienestar está más atada a la posibilidad de compartir espacios comunes.

05. EDUCACIÓN

Un análisis comparativo de las rondas censales más recientes (2000 y 2010) muestra que en las dos primeras décadas del siglo XXI ha mejorado el acceso a la educación de la población indígena, aunque persisten todavía brechas de alfabetización, asistencia escolar, culminación de la educación secundaria y años de educación. Para muchos países de la región (Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Venezuela), se registra una reducción promedio de casi 10 puntos porcentuales en las tasas de analfabetismo de las poblaciones indígenas entre los censos realizados durante la década del 2000 y los últimos censos del decenio 2010 (CELADE, 2020). Durante este periodo esos mismos países, a excepción de Brasil, experimentaron -en promedio- un aumento de aproximadamente 1,5 años en la escolaridad de los adultos indígenas. Adicionalmente, la asistencia escolar aumentó en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Panamá¹⁰. Específicamente, la tasa de asistencia escolar en niños y niñas indígenas de 6 a 11 años incrementó, en promedio, más de 10 puntos porcentuales (CELADE, 2020). Para adolescentes indígenas de 12 a 17 años, el aumento promedio de la asistencia escolar registrado entre las dos rondas censales fue más de 14 puntos porcentuales (CELADE, 2020). Finalmente, entre jóvenes indígenas de 18 a 22 años, la tasa de asistencia presentó un incremento promedio de 11,5 puntos porcentuales entre los países anteriormente mencionados (CELADE, 2020).

A pesar de estos avances, aún persisten brechas en el acceso a la educación entre las poblaciones indígenas y no indígenas. En Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Uruguay y Venezuela, el porcentaje promedio de jóvenes indígenas (15-19 años) que finalizaron la primaria es

casi 10 puntos inferior que el porcentaje de jóvenes no indígenas que finalizan la primaria (CELADE, 2020). En Brasil, Ecuador y Guatemala, las brechas en terminación de la educación secundaria entre personas indígenas y no indígenas de 20 a 25 años en 2018 son, respectivamente, de 17,6 puntos porcentuales, 22,4 puntos porcentuales y 10,4 puntos porcentuales (SCL, Base Armonizada Encuestas de Hogares). Estas brechas también se pueden observar en la asistencia escolar: en Colombia, Costa Rica y Venezuela, la asistencia escolar de los niños y niñas indígenas (6 a 11 años) es entre 14 y 20 puntos porcentuales inferior que sus pares no indígenas (Banco Mundial, 2015). De igual manera, esta brecha es similar en las tasas de asistencia escolar entre adolescentes indígenas y no indígenas.

De acuerdo con las encuestas de hogares¹¹, en Brasil, Chile, Ecuador y Guatemala la brecha de asistencia escolar ha tenido múltiples variaciones entre el 2008 y el 2018. Entre los niños de 6 a 11 años la brecha se ha mantenido estable en Chile y Ecuador, donde la diferencia entre niños indígenas y no indígenas suele ser menor a un punto porcentual. Por su parte, se estima que en Brasil la asistencia escolar de niños indígenas aumentó casi siete puntos porcentuales entre el 2008 y el 2018, reduciendo la brecha entre niños indígenas y no indígenas a cerca de dos puntos para el último año. Sin embargo, Brasil presentó dos años en este periodo (2009 y 2010) en los que la brecha fue superior a 10 pp. En el caso de Guatemala, la asistencia escolar de los niños indígenas en el 2018 es 0,1 menos que en el 2008 y se puede observar que el año más crítico de esta brecha fue 2015, cuando el 88,6% de los niños indígenas registraron asistencia escolar, casi seis pp menos que sus pares no indígenas. En el gráfico 12 se puede ver cómo ha evolucionado esta brecha en

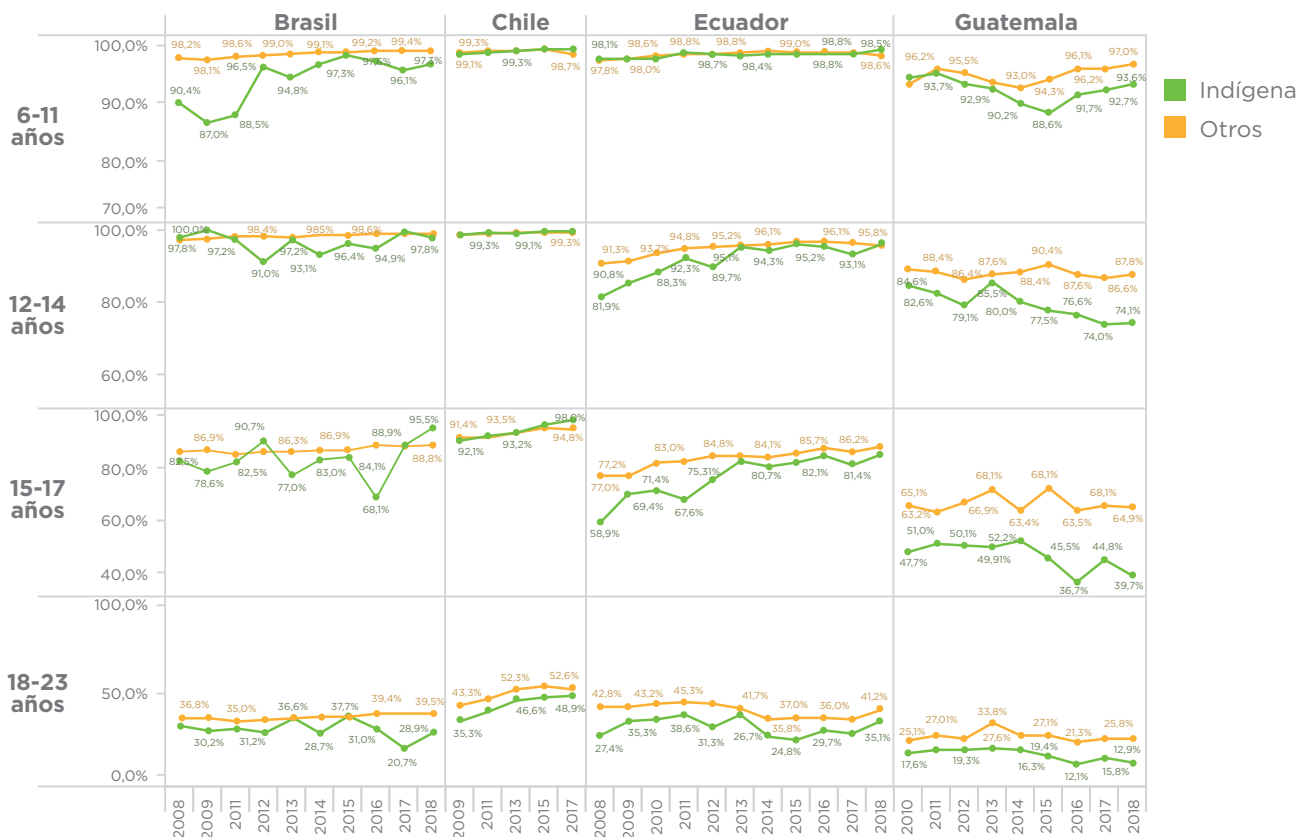
¹⁰ En el mismo periodo de tiempo también aumentó la asistencia escolar promedio de la población indígena Venezuela, aunque es posible que, debido a la coyuntura política, en la última década se haya presentado un retroceso en los logros educativos y de inclusión social para los pueblos indígenas de ese país.

¹¹ Cálculos de SCL base el Banco de Datos Armonizado de Las Encuestas de Hogares del Sector Social.

Brasil, Chile, Ecuador y Guatemala en dicho periodo de tiempo para todas las edades escolares. Mientras Chile y Ecuador presentan un aumento en la asistencia escolar de todos los grupos etarios (hasta los 23 años) casi todos los años, Brasil presenta tasas muy similares

entre el 2008 y el 2018 aunque con algunos picos en la trayectoria, y Guatemala registra una tendencia a la baja en la asistencia escolar de los indígenas de casi todas las edades.

Gráfico 12. Asistencia escolar



Fuente: Cálculos de SCL base el Banco de Datos Armonizado de Las Encuestas de Hogares del Sector Social.

La deserción escolar a nivel secundario podría ser resultado de los altos niveles de participación laboral entre jóvenes indígenas. En Brasil, Ecuador y Guatemala, el nivel de empleo entre jóvenes indígenas de 15 a 17 años supera por un promedio de 25,9 puntos porcentuales el nivel de empleo entre jóvenes no indígenas y no afrodescendientes en 2018 (SCL, Base Armonizada Encuestas de Hogares).

En el nivel preescolar, persisten las brechas entre la población indígena y no indígena: la proporción de niños indígenas de 5 años que ha tenido al menos un año de educación preescolar es inferior, en comparación con los niños no indígenas, un punto porcentual en Chile, Perú y México, seis puntos porcentuales en Bolivia, cuatro en Costa Rica y 17 en Panamá. En Guyana, el porcentaje de niños indígenas

de 3 a 5 años con acceso a algún tipo de educación durante la primera infancia es 32 puntos porcentuales más bajo que entre los niños afrodescendientes (40% frente a 72%; UNICEF, 2017).

Los retos para cerrar las brechas en el desarrollo que aparecen desde la primera infancia son de distinta naturaleza. Primero, las diferencias en el estatus socioeconómico se han relacionado con desafíos nutricionales y de desarrollo en los niños y altas tasas de enfermedades infecciosas (Alderman et al., 2017; Arteaga & Glewwe, 2017; Glewwe et al., 2001). En segundo lugar, la calidad de la infraestructura de los centros de desarrollo de la primera infancia y preescolares en las comunidades indígenas suele ser baja y hay un acceso muy limitado a otras modalidades de programas de promoción del desarrollo durante la primera infancia

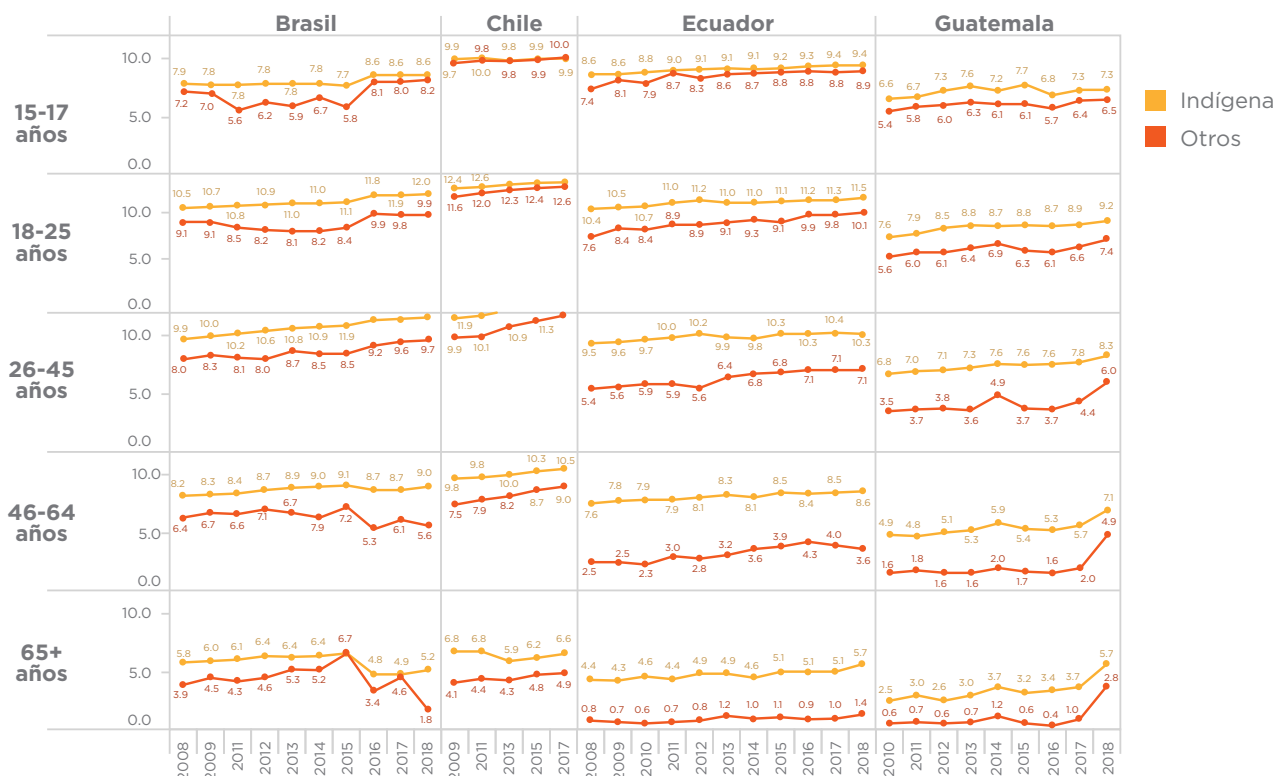
(Näslund-Hadley et al, 2020). En tercer lugar, los servicios de primera infancia carecen a menudo de un enfoque integral cultural indígena (Rodríguez Gómez et. al, 2012; Araujo, López-Boo y Puyana, 2013). En cuarto lugar, algunas debilidades de la educación bilingüe tales como la falta de disponibilidad, su calidad y también la formación, los incentivos e inclusive la discriminación por parte de los maestros, limitan el desarrollo de habilidades y el aprendizaje de las niñas y los niños indígenas (Arteaga & Glewwe, 2017; Rodríguez Gómez, et al, 2012).

Otro aspecto que refleja las brechas de acceso a la educación en las poblaciones indígenas latinoamericanas es el bajo nivel de participación de jóvenes indígenas en educación terciaria en comparación con sus pares no indígenas. En Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador el porcentaje de indígenas entre 20 y 30 años que han cursado dos años o más de educación terciaria era entre ocho y 16,7 puntos porcentuales más bajo que en poblaciones no indígenas en el año 2018 (SCL, Base Armonizada Encuestas de Hogares). Sin embargo, existe evidencia que sugiere que esta brecha podría estarse reduciendo. Guatemala, Perú y Uruguay registraron un incremento aproximado de entre dos y cuatro puntos porcentuales de la

participación de poblaciones indígenas en educación terciaria por encima de sus pares no indígenas entre 2017 y 2018 (SCL, Base Armonizada Encuestas de Hogares).

El promedio de años de educación sigue siendo más bajo para poblaciones indígenas que para poblaciones no indígenas en casi todas las edades, aunque esta brecha es más estrecha entre las poblaciones más jóvenes. En Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay, la población indígena mayor de 65 años tiene un promedio de escolaridad de 3,6 años, lo cual representa una brecha de casi 2,6 años en comparación con los no indígenas. Mientras tanto, en la población indígena de 26 a 45 años y de 18 a 25 años, el promedio es de 9,1 y 10,3, respectivamente. Esto representa una reducción de las brechas que se aproximan a 1,7 en el caso de los adultos de 26 a 45 años y uno en el caso de los jóvenes indígenas (18-25 años; SCL, Base Armonizada Encuestas de Hogares). Esto sugiere que el número de años de escolaridad promedio para personas indígenas en la región ha ido incrementando de manera intergeneracional, aunque no lo suficiente para cerrar las brechas con los no indígenas.

Gráfico 13. Promedio de años de escolaridad por grupos de edad



Fuente: Cálculos de SCL base el Banco de Datos Armonizado de Las Encuestas de Hogares

Por lo general las mujeres indígenas han enfrentado mayores barreras para acceder a la educación que sus pares no indígenas. En Bolivia, por ejemplo, las mujeres indígenas tienen cerca de 28 puntos porcentuales menos de probabilidades de terminar la escuela secundaria en comparación con las mujeres no indígenas. Mientras tanto, esta brecha para hombres quechua en Bolivia es de 14 puntos porcentuales (Banco Mundial, 2015: 14-15). Un indicador de la brecha de género en el acceso a la educación es la tasa de analfabetismo: en promedio para diez países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Uruguay y Venezuela) la tasa de analfabetismo de las mujeres indígenas es cerca de 18%, casi seis puntos porcentuales más que la tasa de los hombres indígenas (CELADE, 2020). En general, casi todos los países de América Latina registran mayores tasas de analfabetismo en mujeres indígenas que en hombres indígenas, con la excepción de Uruguay. Además, los datos de algunos países latinoamericanos revelan que las niñas indígenas tienen menos probabilidades de hablar español que los niños indígenas (Chioda, 2011; Duryea et. al, 2007; Sperling et. al, 2016). Estas brechas son más amplias en las zonas rurales. Por ejemplo, en Bolivia las tasas de terminación de la escuela primaria y secundaria de las mujeres indígenas rurales equivalen a menos de la mitad de las tasas de terminación de los hombres no indígenas (Banco Mundial, 2015: 83).

Las brechas de género en el acceso a la educación parecerían estar cambiando entre las nuevas generaciones. En promedio, para los mismos diez países (Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Uruguay y Venezuela), las niñas (6-11 años) y jóvenes (18-22 años) indígenas presentan mayores tasas de asistencia escolar que sus pares varones. Las niñas indígenas de estos países presentan una tasa de asistencia media de alrededor de 92,3% (CELADE, 2020). La tasa de asistencia de las jóvenes indígenas es casi la misma que la de los hombres indígenas, apenas un punto porcentual mayor. Sin embargo, durante la adolescencia (12-17 años), la tasa de asistencia de las mujeres indígenas es menor que la de los hombres indígenas por un poco más de un punto porcentual (CELADE, 2020). En Guyana la brecha de género en la educación secundaria se invierte, dado que solo el 13% de los niños indígenas en el interior del país están matriculados en la escuela cuando llegan al último año de educación secundaria, en comparación con el 87% de las niñas (UNICEF, 2017).

Además, muchas de las brechas educativas entre personas indígenas y no indígenas están asociadas

con una debilidad en la oferta y las posibilidades de acceso a la Educación Intercultural Bilingüe. De hecho, la mayoría de los niños, niñas y jóvenes indígenas en América Latina se enfrenta a más retos en la educación que sus pares no indígenas porque usualmente deben acceder a un sistema educativo que se imparte en una lengua sobre la que no tienen casi dominio (Morrison et. al, 2017). Esto tiene repercusiones en los obstáculos que experimentan los niños indígenas para comprender los materiales escolares y, en general, para culminar el proceso educativo. La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) ofrece alternativas para cerrar algunas de estas brechas, pero todavía tiene una baja cobertura. En Argentina, por ejemplo, más del 90% de los indígenas que asisten a la escuela reciben la educación en otro idioma diferente a su lengua indígena; mientras tanto, en Perú -donde la EIB es impulsada por la Constitución desde hace casi tres décadas- sólo el 38% de los niños indígenas tiene clases en su idioma (Banco Mundial, 2015).

Esta situación también ha afectado la pérdida progresiva de las lenguas indígenas, de manera que menos del 32% de los indígenas que terminan la escuela primaria continúa hablando su lengua y apenas el 5% de los indígenas que culminan el bachillerato habla su lengua nativa¹² (Banco Mundial, 2015). Actualmente en América Latina y el Caribe hay sólo 560 lenguas indígenas en uso, mientras se registran hasta más de 800 pueblos indígenas en la región (Banco Mundial, 2019). Otros reportes señalan que en las últimas décadas uno de cada cinco pueblos amerindios ha perdido su lengua nativa (Banco Mundial, 2019). Por ejemplo, en Guatemala entre el 2002 y el 2018, la mayoría de los idiomas indígenas perdieron su vitalidad. Esto se explica principalmente porque la enseñanza de estos idiomas disminuyó para todos los pueblos: en casos como los pueblos Chuj, Itza', Popti', Mopan, Sakapulteko, Sipakapense, Tz'utujil y Garífuna, la enseñanza de los idiomas indígenas se redujo más del 25%. En otros casos, como el del pueblo Kaqchikel, se registró una gran pérdida absoluta de hablantes del idioma indígena, pasando de 432,998 hablantes en 2002 a 411,089 en 2018. Finalmente, otro elemento que explica la pérdida de vitalidad de los idiomas indígenas en Guatemala es que hay un aumento marcado del monolingüismo en español, lo cual indica que el castellano ha desplazado paulatinamente a los idiomas indígenas, como en el caso de los Garífuna, cuya tasa de monolingüismo en español aumentó 26 puntos porcentuales en el periodo analizado (Us, 2021).

¹² Estos datos son calculados por el Banco Mundial para siete países: Bolivia, México, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela y Ecuador.

06. SALUD

La salud es uno de los aspectos que mejor refleja las desigualdades y baja calidad de vida a las que se enfrentan los pueblos indígenas en América Latina.

Por lo general, estas poblaciones son más vulnerables frente a enfermedades infecciosas, pero también frente a otros vectores de riesgo ligados a la salud sexual y reproductiva y la salud mental. Se ha identificado que hay mayores tasas de mortalidad en las poblaciones indígenas y que están asociadas a diferentes dinámicas de pobreza, exclusión, violencia, acceso precario a servicios básicos, entre otras causas.

Las tasas de mortalidad infantil son superiores en poblaciones indígenas que en poblaciones no indígenas en la mayoría de los países de la región. Ecuador y Panamá presentan tasas de mortalidad infantil mayores al 30 por mil para poblaciones indígenas: 33,82 por mil en Ecuador y 37,81 por mil en Panamá (CELADE, 2020). Estas tasas de mortalidad infantil en poblaciones indígenas en estos países son casi 12 y 25 puntos por mil más altas que en poblaciones no indígenas (CELADE, 2020). Por su parte, Brasil y Venezuela presentan tasas de mortalidad infantil en poblaciones indígenas por encima del 20 por mil y registran brechas entre 5,2 y 10,2 puntos por mil con respecto a las poblaciones no indígenas (CELADE, 2020). Los países que tienen menores tasas de mortalidad infantil en poblaciones indígenas en la región son Costa Rica y Uruguay, con aproximadamente 10 por mil y 14 por mil, respectivamente (CELADE, 2020). En estos últimos países las brechas de mortalidad infantil entre indígenas y no indígenas están en un rango entre uno y cuatro puntos por mil.

Otro problema de salud de gran magnitud en las poblaciones indígenas de la región es el de desnutrición crónica (baja talla por edad) durante los primeros cinco años de vida. En siete países de América Latina, el porcentaje de niños y niñas indígenas menores de 5 años con desnutrición crónica es más de dos veces el nivel de sus pares no indígenas (CEPAL, 2017: 162). Para estos países, la tasa de desnutrición

crónica infantil en poblaciones indígenas se ubica en un rango de entre 22,3% (Colombia) y 58% (Guatemala; CEPAL, 2017).

Uno de los mayores retos de los pueblos indígenas, en particular de los pueblos no contactados o en aislamiento voluntario, es su alta vulnerabilidad a enfermedades para las cuales no han desarrollado respuestas inmunológicas adecuadas y, como resultado, presentan niveles muy elevados de mortalidad por enfermedades infecciosas. Entre las enfermedades que más afectan a la población indígena de la región están: gripe, varicela, sarampión, malaria, tuberculosis, gonorrea y hepatitis B (Contreras Pulache et. al., 2014; Sampaio et. al., 1996). Por ejemplo, en la triple frontera amazónica Bolivia-Perú-Brasil los principales problemas de salud de las poblaciones indígenas se asocian con una combinación de factores sociodemográficos y ecológicos que han generado fuertes impactos de: infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, malaria y dengue (UNFPA, MSI-B y SEDES Pando, 2015). En 2014, por lo menos una de estas enfermedades se presentó en cerca del 45% de la población indígena de Pando (Bolivia; UNFPA, MSI-B, SEDES Pando, 2015).

La vulnerabilidad frente a estas enfermedades es particularmente alta entre los PIACI. Estos pueblos han afrontado problemas por epidemias y enfermedades infecciosas. Hay reportes que señalan que los Matis en Brasil, tras entrar en contacto en 1976, perdieron cerca de un tercio de su población debido a epidemias de gripe y otras enfermedades (Arisi, 2010). Otros reportes de la década de 1990 resaltan afectaciones en las poblaciones por un brote de malaria en el área (Sampaio et. al., 1996). Posteriormente, entre los años 2001 y 2004, se presentaron epidemias de hepatitis B y D entre los pueblos indígenas del Vale do Javari (Nakamura, 2015).

En particular en la región amazónica hay una mayor incidencia de las enfermedades infecciosas en los

pueblos indígenas en los lugares que están expuestos a niveles más altos de degradación ambiental por el desarrollo de actividades extractivas. Por ejemplo, algunos estudios señalan que en las zonas de mayor deforestación hay una propagación más elevada de enfermedades como la malaria y el dengue (OTCA, 2018: 14). Además, otras enfermedades que se presentan en la región suelen ser ocasionadas por el deterioro de la calidad de agua de las fuentes hídricas que abastecen a los pueblos indígenas. Algunas de las causas más comunes de la contaminación y el deterioro de la calidad del agua están relacionadas con la presencia de metales pesados por el desarrollo de la minería ilegal, los accidentes ambientales en las zonas de extracción petrolera y el vertimiento de aguas residuales domiciliarias o de actividades industriales (OTCA, 2018).

Los pueblos indígenas de la región han sido particularmente vulnerables frente a la propagación de la pandemia por la COVID-19 debido a sus condiciones de hacinamiento, el débil acceso a servicios de salud y saneamiento, y su mayor exposición en las economías informales (CEPAL, 2020). En Colombia, por ejemplo, hasta el 21 de mayo de 2021 se habían registrado 48.182 casos positivos de COVID-19 en los pueblos indígenas. De los indígenas contagiados en el país ha fallecido el 3% a causa del virus, 0,4 puntos porcentuales más que la proporción de fallecidos en el total de la población (INS, 2021). Para diciembre del 2020, más de 1700 indígenas habían muerto en México a causa de la pandemia (Secretaría de Salud, 2020). Los grupos poblacionales más vulnerables frente a la propagación del virus han sido los menores de edad, los adultos mayores y los pueblos transfronterizos (CEPAL, 2020). Adicionalmente, las medidas de confinamiento decretadas por los distintos gobiernos de la región han afectado las posibilidades de trabajo de los pueblos indígenas, lo cual ha degradado sus medios de vida y ha incrementado los riesgos de vivir en condiciones de pobreza extrema (IWGIA & OIT, 2020).

Aunque hay disposiciones legales nacionales para la protección de los pueblos indígenas, no hay un

marco compartido de acción entre las naciones para atender la vulnerabilidad en contextos de frontera de los pueblos indígenas. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica afirma que hay un frágil ejercicio del derecho a la salud de los pueblos indígenas, débil integración de las instituciones de salud, como los Ministerios de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), escasa inclusión de pueblos y autoridades indígenas en el desarrollo de planes de contingencia nacionales y locales con enfoques interculturales, pocos intercambios de experiencias y espacios de formación que presenten buenas prácticas en la gestión de salud entre países, e insuficiencia de información y estrategias de comunicación para los planes de salud transfronterizos.

La población indígena de la región ha tenido fuertes afectaciones por enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, entre 1999 y 2000, en el departamento de Pando (Bolivia) se presentaron los niveles de prevalencia de gonorrea y sífilis más altos de la Amazonía boliviana: 142 y 83 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente (Puig y Montalvo, 2011: 43). Así mismo, la prevalencia del VIH ha sido amplia en esta región de la Amazonía boliviana, por lo que se han diseñado programas de prevención con las organizaciones indígenas para atender la gran vulnerabilidad asociada al bajo uso de métodos anticonceptivos de barrera, el bajo nivel de acceso a servicios de salud y a las migraciones internas.

La población indígena presenta mayores niveles de embarazo adolescente que la población no indígena. En países como Colombia, Guatemala y México se evidencia un mayor porcentaje del total de adolescentes indígenas que reportan ser madres en comparación con sus pares no indígenas. Este resultado es más alarmante en países como Colombia, en el que este porcentaje es casi el doble en las mujeres que se autoidentifican como indígenas (28,9% vs 16,2%). De los países analizados, Chile es el único donde no se observa esta tendencia, ya que presenta porcentajes muy similares en las dos poblaciones (Tabla 3).

Tabla 3. Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que han tenido hijos o están embarazadas¹³

País	Indígenas	No indígenas ¹⁴
COL	28,9	16,2
GTM	15,4	12,8
MEX	12,9	10,7
CHL	8,2	8,4

Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de las encuestas de hogares, ECV (2018), ENEI (2018), ENIGH (2018) y Casen (2017)

Los diferentes problemas de exclusión y marginalización social a los que se enfrentan los pueblos indígenas parecen estar relacionados muchas veces con problemas de salud mental como la depresión, el alcoholismo y el suicidio

(CEPAL, 2020). Aunque no hay datos suficientes para reconocer cuál es el estado de esta problemática en América Latina, se presume que los más afectados son los jóvenes indígenas. La frecuencia de estas condiciones se relaciona con la degradación de los territorios, la ruptura de lazos sociales, entre otros factores. Evidencia de esto es que en otros países como Estados Unidos, Canadá y Australia, las tasas de suicidio indígena pueden llegar a ser hasta cinco veces más altas que en poblaciones no indígenas (CEPAL, 2020: 83). Un ejemplo en América Latina que se encuentra documentado es el caso de ocho suicidios que ocurrieron en la comunidad emberá de Colombia (compuesta por 270 familias, aproximadamente) frente a una suerte de angustia social ocasionada por la presencia de una empresa minera en su territorio (CEPAL, 2020). Otro estudio de caso documentado muestra cómo en Chile las tasas de mortalidad de las poblaciones indígenas pueden ser entre un 40% y un 280% más altas que las de sus pares no indígenas. Además, entre los años 2004 y 2006, de la población indígena que falleció por algún tipo de traumatismo, el 24,2% murió a causa de lesiones autoinflingidas (CEPAL, 2020: 87).

Los niveles de prevalencia de discapacidad son mayores entre personas y hogares indígenas. En Bolivia, por ejemplo, se estima que el 15,4% de los indígenas tiene alguna discapacidad para moverse, subir escaleras, oír, ver o realizar actividades de

comunicación, cognición y autocuidado¹⁵. Esto representa casi el doble del porcentaje de la población no indígena que tiene alguna discapacidad (7,8%). En cuanto a los hogares, se registra que el 31,9% de los hogares indígenas en Bolivia tienen personas con discapacidad, más de 11 puntos porcentuales en comparación con los no indígenas. En México, el 8,5% de los indígenas tienen alguna discapacidad, 1,6 puntos porcentuales más que los no indígenas; el 23,3% de los hogares indígenas tienen personas con discapacidad, cuatro puntos porcentuales más que los hogares no indígenas (SCL, Base Armonizada Encuestas de Hogares). Además, los grupos poblacionales más propensos a sufrir de alguna discapacidad son los adultos mayores de 60 años y las personas u hogares en condición de pobreza (Duryea et. Al, 2019).

¹³ Para los casos de Guatemala y México la pregunta de las encuestas ENEI y ENIGH no tiene en cuenta a las mujeres que están embarazadas al momento de la encuesta.

¹⁴ De las encuestas analizadas, la ECV de Colombia es la única que, en la variable étnica, además de la población indígena, identifica la población afrodescendiente. Esta población es excluida de la categoría “No indígena”, ya que es un grupo con una cantidad importante de personas y que, además, podría presentar problemáticas similares.

¹⁵ Según las preguntas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad (Washington Group).

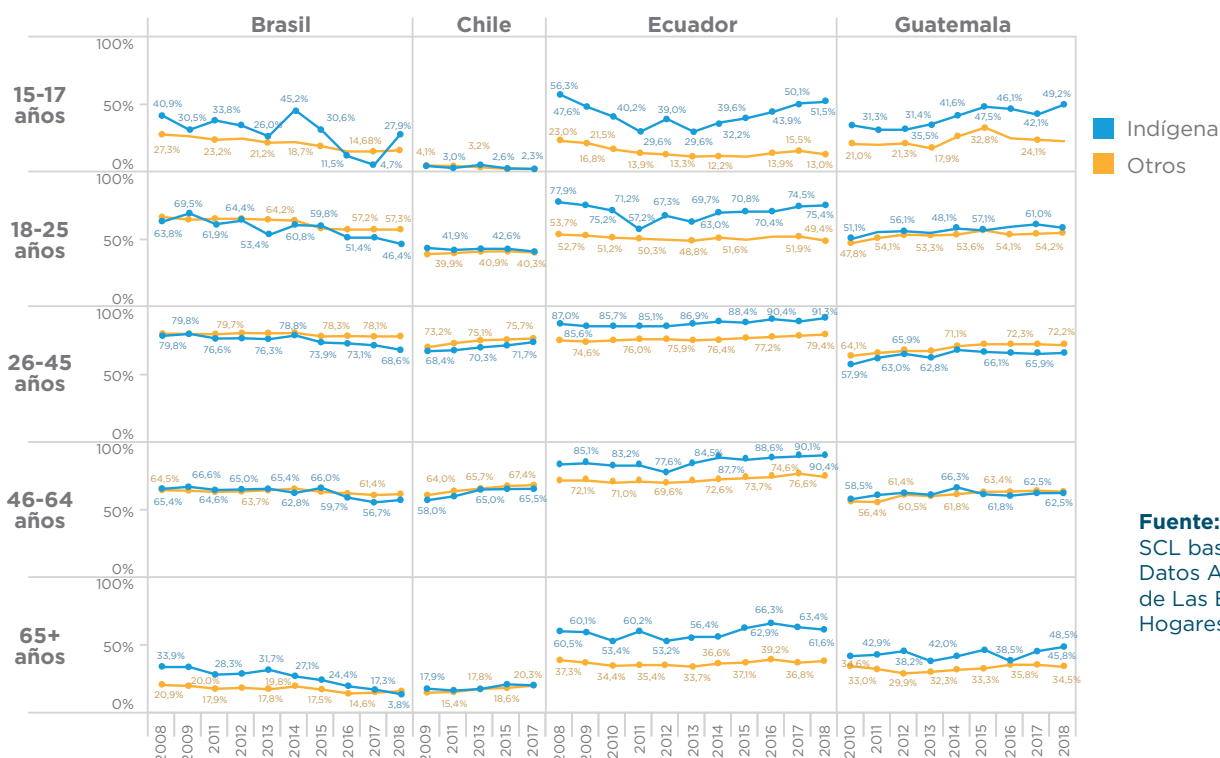
07. TRABAJO

Ocupación e informalidad

En Brasil, Ecuador, Chile y Guatemala, los niveles de empleo para personas indígenas son superiores o muy similares a los niveles de empleo de personas no indígenas, no afrodescendientes entre los años 2008 y 2018. Se destaca que Chile no presenta brechas en los niveles de empleo entre estas dos poblaciones para ninguno de los rangos de edad analizados. Por su parte, en Ecuador, las personas indígenas tienen niveles muy superiores de empleo en todos los grupos etarios. Particularmente, existe una alta brecha en el rango de 15 a 17 años, en la cual la población indígena está mucho más empleada que los no indígenas no afrodescendientes. Esto podría estar reflejando la

mayor incidencia de trabajo infantil y trabajo forzoso en la población indígena, fenómeno que ha sido estudiado por la OIT (2009) y UNPFII (2011). Así mismo, se destaca la alta participación laboral en los adultos mayores, lo cual podría estar relacionado con el bajo acceso a protección social en estas poblaciones. La brecha en el nivel de empleo no presenta cambios sistemáticos a través de los años, ya que a pesar de las fluctuaciones año a año, pareciera que en promedio la población indígena tiene más probabilidad de tener un empleo, sin embargo, la discusión central puede estar enfocada en el tipo de trabajo, las condiciones laborales y los salarios que devenga esta población.

Gráfico 14. Niveles de empleo en poblaciones indígenas y no indígenas por grupos de edad



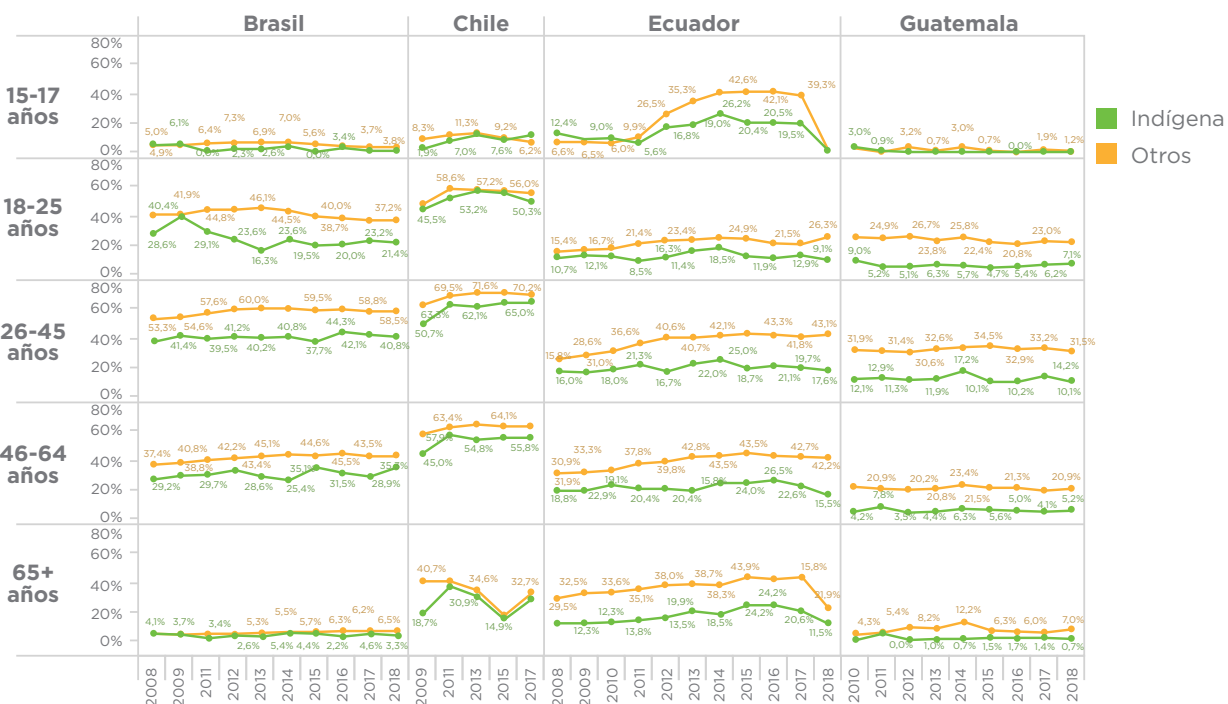
Fuente: Cálculos de SCL base el Banco de Datos Armonizado de Las Encuestas de Hogares.

Sin embargo, la mayoría de los indígenas se ocupa en el sector informal donde los ingresos son generalmente inferiores que los del sector formal y en donde no cotizan a la seguridad social. Esto es lo que revela el análisis de datos tomando como proxy de informalidad aquellos trabajadores que se clasifican como trabajadores por cuenta propia en las encuestas de empleo e ingresos. La Tabla 4 muestra los datos de ocupación por cuenta propia para diez países para hombres y mujeres indígenas. Por otro lado, un análisis del 2008 al 2018 en Ecuador, Guatemala, Brasil y Chile revela que las personas indígenas tienen niveles significativamente más bajos de formalidad que sus contrapartes no-indígenas (Gráfico 15). Este análisis toma como base la definición de formalidad de las Encuestas de Hogares, según las cuales un individuo se califica como formal si está afiliado o cotiza a la Seguridad Social, bien sea de forma voluntaria o por medio de su empleador, en el periodo de referencia.

En Brasil el nivel de empleo formal promedio en todos los grupos etarios (de los 15 años en adelante) se ha mantenido alrededor del 20,3% entre 2008 y 2018, lo

que representa una brecha promedio de 10,4 puntos porcentuales en comparación con los no indígenas para el mismo periodo de tiempo. En el caso de este país la brecha ha sido particularmente alta en los años 2013 y 2014, cuando alcanzó 14,5 y 12,3 pp, respectivamente. Por su parte, en Ecuador para el mismo periodo de tiempo, el promedio del nivel de empleo formal de los indígenas ha sido de 16,8%, 14,9 pp por debajo del nivel de formalidad de los no indígenas. Además, se puede observar que la brecha entre indígenas y no indígenas ha tenido una tendencia creciente, ya que pasó de 7,5 pp en 2008 a 16 pp en 2018 y presentó algunos picos elevados en los años 2015, 2016 y 2017: 20,3, 18 y 18,6 puntos porcentuales, respectivamente. Mientras tanto, en Chile se puede observar un nivel de formalidad más alto entre los pueblos indígenas, ya que entre el 2009 y el 2017 han presentado una tasa de formalidad laboral promedio de 40,3%. Además, la brecha en comparación con los no indígenas se ha reducido en más de ocho puntos porcentuales, pasando de 11,8 en el 2009 a 3,7 en el 2017 (SCL, Base Armonizada Encuestas de Hogares).

Gráfico 15. Niveles de empleo formal



Fuente: Cálculos de SCL base el Banco de Datos Armonizado de Las Encuestas de Hogares.

Tabla 4. Ocupados que trabajan por cuenta propia

País	Total			Hombre			Mujer		
	Indígena	No indígena	Brecha	Indígena	No indígena	Brecha	Indígena	No indígena	Brecha
Bolivia (Estado Plurinacional), 2015	51,3	38,1	1,3	55,6	40,2	1,4	45,7	35,1	1,3
Brasil, 2015	43,4	24,5	1,8	44,4	20,2	1,6	42	19,9	2,1
Chile, 2015	23,2	18,9	1,2	24	19,3	1,3	21,2	18,4	1,2
Ecuador, 2016	40,3	32,9	1,2	46,2	31,1	1,5	33,8	35,5	1
Guatemala, 2014	30,6	23,8	1,3	20,1	19,6	1,4	35,9	31,3	1,2
México, 2016	18	12,9	1,4	13,8	10,4	1,3	24	16,4	1,5
Nicaragua, 2014	31,4	30,6	1	27,6	25,7	1,1	38,8	38,7	1
Panamá, 2016	43,2	25,3	1,7	42,9	20,2	1,5	43,6	21	2,1
Perú, 2016	44,9	35	1,3	47,4	34,6	1,4	42,3	35,4	1,2
Uruguay, 2016	26,7	23,1	1,2	10,8	25,1	1,2	22,3	20,6	1,1
Total Ponderado	26,6	22,2	1,2	23,9	22,3	1,1	30,2	22	1,4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2020.

El nivel de ingresos laborales que perciben las poblaciones indígenas es menor al de las no indígenas.

La Tabla 5 contiene datos para Bolivia, donde el ingreso laboral por hora para la población no indígena es 1,81 veces mayor al de la población indígena. Esta brecha se puede explicar principalmente por la alta participación de los indígenas en los mercados rurales, en particular en actividades agrícolas, donde las remuneraciones y las condiciones laborales suelen ser más precarias que en otros sectores económicos. En la zona urbana, el

ingreso por hora de los no indígenas es apenas 1,07 veces mayor que el de los indígenas. Por el contrario, en zonas rurales, es 2,15 veces más grande. En cuanto al acceso a empleos de calidad, la población indígena boliviana tiene una mayor participación en el sector informal que la población no indígena (91% vs 78% a nivel nacional). La brecha entre indígenas y no indígenas en participación en empleos informales es mayor en el área urbana (82% vs. 75%). En la zona rural, más del 90% del empleo es informal para ambos grupos.

Tabla 5. Ingresos laborales e informalidad por área geográfica, Bolivia

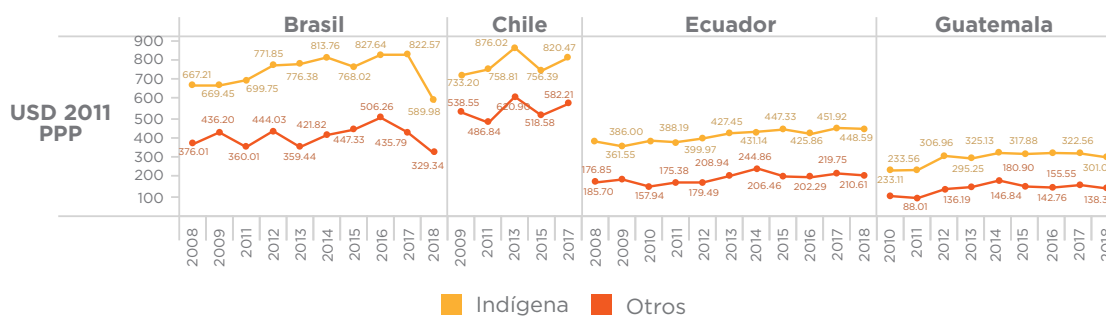
	Ingreso laboral por hora (en Bs.)			Tasa de informalidad laboral (% del empleo total)		
	Urbano	Rural	Nacional	Urbano	Rural	Nacional
No indígenas	20,5	11,4	18,8	75%	91%	78%
Indígenas	19,1	5,3	10,4	82%	96%	91%
Total	20,2	7,1	15,1	77%	95%	83%

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas a Hogares 2005 y 2015.

Por otro lado, en Brasil, Chile, Ecuador, y Guatemala, el ingreso per cápita promedio es consistentemente más bajo para hogares indígenas desde el 2008. Estos resultados se visualizan en el gráfico 16 sugiriendo que

las brechas en ingreso per cápita no son resultado de diferencias en niveles de empleo, sino de la calidad de éste. Estas tendencias son extremadamente preocupantes.

Gráfico 16. Ingreso per cápita indígenas



Fuente: Cálculos de SCL base el Banco de Datos Armonizado de Las Encuestas de Hogares.

La alta informalidad del empleo de las poblaciones indígenas en América Latina se caracteriza por empleos poco calificados, de baja productividad, mal remunerados y con una baja tasa de cotización a la seguridad social. En países como Perú, Ecuador, Bolivia y México, las poblaciones indígenas tienen entre dos y tres veces menos acceso a empleos calificados y estables que las poblaciones no indígenas (Banco Mundial, 2015: 11). Esto, sumado a la alta informalidad del empleo entre las poblaciones indígenas, resulta en que los trabajadores indígenas acceden a menos prestaciones sociales tales como seguridad social, seguros de salud o pensiones (Banco Mundial, 2018).

El porcentaje de empleados indígenas que no cotiza o no está afiliado a un sistema previsional es de 79,8% en América Latina, casi 31 puntos porcentuales más elevado que en poblaciones no indígenas (CEPAL, 2020). Esto también se refleja en el bajo porcentaje de población indígena mayor de 60 años que recibe pensiones contributivas. Por ejemplo, en Bolivia, Ecuador, Panamá y Perú, la tasa de población indígena mayor de 60 años que goza de una pensión contributiva no supera el 11% (CEPAL, 2020). Por esta razón, la cobertura de las pensiones no contributivas es más amplia entre las poblaciones indígenas: en Bolivia la población indígena mayor de 60 años con pensiones no contributivas asciende al 93,5% (CEPAL, 2020). Sin embargo, en otros países como Chile, Ecuador y México esta cobertura sigue siendo baja y no supera el 45% de la población indígena mayor de 60 años (CEPAL, 2020). Por su parte, Panamá y Perú son los países que presentan menor cobertura de pensiones no contributivas para la población indígena mayor de 60 años en la región, ya que registran tasas de 18,9% y 29%, respectivamente.

Las mujeres indígenas enfrentan desafíos aún mayores para acceder a empleos formales y estables. Esto se refleja en que la población de mujeres indígenas que vive en entornos urbanos, por ejemplo, regularmente accede

a empleos de baja cualificación y peor remunerados. De hecho, una gran cantidad de mujeres indígenas en las ciudades de la región se dedican principalmente al servicio doméstico informal (Banco Mundial, 2015: 30). Varios países de la región presentan un mayor porcentaje de mujeres que trabajan por cuenta propia o desempeñan labores familiares no remuneradas en comparación con los hombres indígenas. En Bolivia y Ecuador el porcentaje de mujeres indígenas que se dedican a estas labores es aproximadamente entre 9,5 y 14 puntos porcentuales mayor que el de los hombres indígenas (CELADE, 2020).

Sectores económicos de empleo para personas indígenas

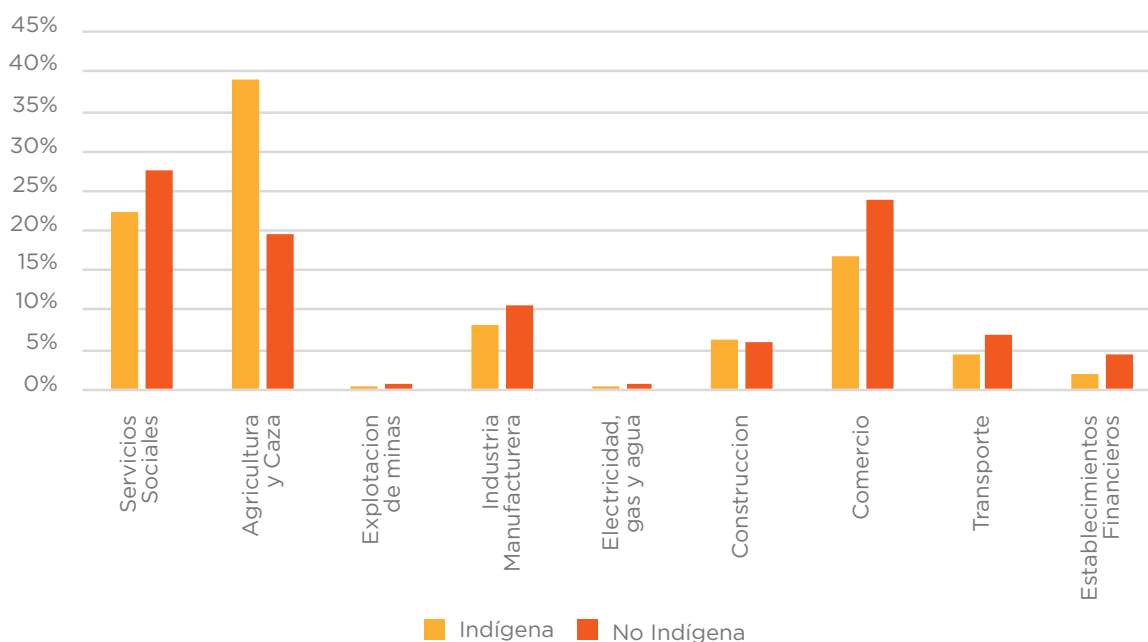
La precariedad laboral de las poblaciones indígenas está relacionada con los tipos de ocupaciones y los sectores económicos en los que se concentran estos trabajos. Precisamente, en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Uruguay, la mayoría de los indígenas se dedica a trabajos manuales, incluyendo la agricultura: en promedio, el 86% de la población indígena mayor de 15 años ocupa trabajos de este tipo. Por su parte, el porcentaje promedio de trabajadores indígenas profesionales y técnicos apenas supera el 9%. Los cargos administrativos y directivos tienen una proporción mucho menor de trabajadores indígenas: 3,5% y 1%, respectivamente (CELADE, 2020).

En cinco países de América Latina (Brasil, Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay), los sectores económicos en los que más se emplean las personas indígenas son agricultura, caza y servicios sociales. Para estos países, en promedio más del 39% de las personas indígenas trabajan en agricultura y caza, y cerca del 22% lo hace en servicios sociales. Si bien las personas no indígenas y no afrodescendientes en estos países también tienen un promedio de participación alta en el sector de servicios sociales (por encima del 27%), su participación promedio en actividades de agricultura

y caza es casi 20 puntos porcentuales inferior a la de los indígenas. Otros sectores económicos que atraen un alto porcentaje de empleados indígenas son el comercio (entre el 18% y 29% de las personas indígenas), la industria manufacturera (con una concentración de poco menos del 13% de las personas indígenas) y la construcción (en el que participa entre el 5% y 7% de la población indígena de estos países). Además, en el sector de transporte se emplea, en promedio, cerca del 7% de la población indígena de estos países. Los sectores en los que menos participan los indígenas en estos países son: servicios (electricidad, gas y agua),

establecimientos financieros y explotación de minas. En particular, los no indígenas y no afrodescendientes de estos países tienen una participación más alta en el sector de comercio (por más de siete puntos porcentuales en comparación con los indígenas) y en establecimientos financieros, pues su tasa promedio de participación en este sector es más del doble de los indígenas (SCL, Base Armonizada Encuestas de Hogares). En el gráfico 17 se puede ver la distribución promedio por sectores económicos de los indígenas y los no indígenas-no afrodescendientes para el año 2018.

Gráfico 17. Distribución laboral indígenas y no indígenas no afrodescendientes por sectores económicos



Fuente: Elaboración propia con cálculos de SCL base el Banco de Datos Armonizado de Las Encuestas de Hogares (2020)

Los indígenas en América Latina han tenido acceso casi exclusivamente a ciertos segmentos laborales que normalmente están asociados a bajos salarios, bajo nivel de acceso a servicios y prestaciones sociales, pocas posibilidades de promoción, entre otras problemáticas (Horbath, 2008). De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2003), esta suerte de segmentación laboral indígena ocurre por la existencia de prejuicios y estigmatizaciones sociales relacionadas con la identificación étnica que niegan el acceso a la educación y al trabajo de calidad. Incluso, muchas de las barreras laborales que enfrentan los indígenas cuando acceden a trabajos asalariados están vinculadas con dificultades para hablar

español, leer y escribir, o acceder a capacitaciones que permitan una mayor cualificación laboral. Un estudio de caso en México muestra que la mayoría de los hombres indígenas que migra a las ciudades ingresa a trabajos en el sector de la construcción y se enfrenta constantemente a burlas por su acento o sus dificultades para hablar español. Por ello, muchos indígenas deben negar su origen étnico para tener mayor movilidad social y posibilidades de ascenso en los oficios de construcción (Bueno, 1994). Además, el cargo que suelen desempeñar los indígenas es el de albañilería, el cual “es el oficio más desgastante, más desprestigiado, más riesgoso y peor pagado” (Bueno, 1994: 16, referenciado en Horbath, 2008).

08 ECONOMÍAS INDÍGENAS

A pesar de la falta de datos para América Latina desde los cuales caracterizar en detalle las economías indígenas, particularmente en zonas rurales, estas pueden clasificarse como economías multimodales compuestas por la articulación, en mayor o menor medida, entre una economía tradicional indígena y una economía de mercado. Las primeras son de carácter no monetario, definidas por la producción familiar y los intercambios sociales de reciprocidad del trabajo y de bienes; y con mecanismos de redistribución a nivel de familias extensas (Perafán, 2000; Colt, 2001). Las economías tradicionales configuran usos culturales del territorio a través de estrategias de organización espacial en las que se usan diversos ecosistemas y pisos térmicos para tomar decisiones sobre qué y cómo producir. Las actividades económicas de subsistencia incluyen principalmente actividades agropecuarias (agricultura, silvicultura, ganadería y pesca). Por ejemplo, en Colombia cerca del 48,1% de las unidades productivas agropecuarias en territorios indígenas tienen como finalidad el autoconsumo y el 9,6% destinan su producción al intercambio o trueque (DANE, 2014). En Perú el 47% de la agricultura familiar de subsistencia es desarrollada por productores cuya lengua materna es una lengua indígena (Escobal et. al, 2015).

Las economías tradicionales son la base de la seguridad alimentaria de muchos pueblos indígenas que habitan en zonas rurales, aunque estas pueden articularse a los mercados locales, nacionales e internacionales a través de productos como el café, el cacao, la papa, los cocos, las plantas aromáticas o medicinales, la quinoa, o las artesanías. En Colombia la producción agropecuaria indígena se destina en un 15,4% a las comercializadoras, mientras que un 14,6% de las unidades productivas indígenas tiene como finalidad la venta de productos agropecuarios en plazas de mercado (DANE, 2014). En Chile, la producción agrícola indígena se ha tecnificado y ha empezado a utilizar insumos industriales y maquinaria para impulsar

una economía de mercado (ODEPA, 2017). Muchas comunidades indígenas viven a orillas de los ríos y, por ello, una de las principales actividades que sustenta su economía es la pesca. Por ejemplo, solamente en la Amazonía boliviana, el pueblo Takana se abastece de 43 especies de peces que habitan en el río Beni y, entre los años 2001 y 2007, registró un total de capturas equivalente a más de 42 toneladas (Miranda-Chumacero et. al, 2011: 238). De igual manera, muchos otros pueblos indígenas en América Latina desarrollan la pesca para conseguir su principal fuente de alimento y, en otras ocasiones, encuentran en esta actividad una fuente de generación de ingresos ligada al comercio de pescado (Miranda-Chumacero et. al, 2011).

Los diferentes niveles de articulación de economías indígenas a los mercados locales e internacionales están relacionados con los sistemas de gobernanza de las comunidades, sus principios de organización social y jurídica y su relación con el medio ambiente y el territorio (Raygada, 2019). Aunque se han elaborado caracterizaciones de algunas economías indígenas, no existe información sistemática para la mayoría de las economías indígenas frente a tres elementos claves de la articulación con mercados nacionales e internacionales: la promoción de la oferta, la promoción integral de negocios indígenas y el reconocimiento del derecho al autogobierno y la autodeterminación de los pueblos indígenas (Albertos, 2019, 2020; Cornell y Jorgensen, 2007; Deruyttere, 2003; Zulueta, 2020). Además, existen otros factores que intervienen en las posibilidades de articulación de las economías indígenas con los mercados de diferentes escalas, tales como: acceso a vías, conectividad, tecnologías de la información y la comunicación, infraestructura de servicios, entre otros.

Existen ejemplos de algunos pueblos indígenas que han logrado de manera excepcional desarrollar estrategias de mayor valor para la articulación con mercados nacionales e internacionales. Algunos ejemplos incluyen la producción textil en Otavalo,

Ecuador; los centros comerciales urbanos indígenas en Perú; el comercio y el sector transporte en Bolivia; la explotación y transformación forestal en México; o los micro vegetales de exportación en el altiplano guatemalteco. Otras comunidades han logrado organizarse para ofrecer experiencias turísticas, o proveer servicios como la educación y la salud (las empresas prestadoras de salud indígenas en Colombia), o servicios financieros (las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador).

Muchos pueblos indígenas también se han involucrado en la producción agrícola orgánica. Este es el caso, por ejemplo, de la producción orgánica de café: en México el 65% de los productores de café orgánico son indígenas y trabajan bajo un esquema biodiversificado con múltiples usos de los ecosistemas (Alarcón-Chairés, 2006: 59). México se ha posicionado como uno de los mayores productores de café orgánico a nivel mundial (Moguel y Toledo, 2000: 23-36 referenciado en Alarcón-Chairés, 2006: 59).

Varios pueblos indígenas de la región se han concentrado en el desarrollo de diferentes esquemas de turismo comunitario. Dos razones explican esta especialización. Primero, se pueden desarrollar actividades de ecoturismo y etnoturismo sostenibles que aprovechan los conocimientos de las comunidades locales. Segundo, las actividades turísticas dejan una mayor rentabilidad que otras formas de aprovechamiento de los recursos naturales. En Costa Rica, por ejemplo, la producción de una hectárea de bosque en turismo es de \$66,5 USD, 2,4 veces el valor de la producción de agua, 1,3 veces superior al valor de animales y plantas silvestres, más de 28 veces el de medicamentos (\$2,31 USD) y 2,4 veces el de energía eléctrica (Alarcón-Chairés, 2006: 58). Muchas iniciativas de turismo o producción de café impulsadas por las mismas comunidades indígenas responden a la noción de buen vivir y contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida, la generación de empleo y la reducción de las migraciones (CEPAL, 2014: 35). En Chile el 74% de los productores indígenas tienen como actividad principal el turismo y el 70,6% desarrolla esta actividad económica de manera permanente todo el año (CIIR, 2020). Un poco menos del 79% de los negocios indígenas de turismo en Chile emplea permanentemente entre 1 y 5 personas por negocio (CIIR, 2020). Dentro del turismo, las actividades que más realizan los indígenas chilenos en temporada alta son: alojamiento turístico, restaurantes y similares, operadores turísticos y guías de turismo. En términos

de ingresos, más del 50% de los emprendimientos indígenas de turismo reportó ventas anuales inferiores a 5.605,53 USD¹⁷ (CIIR, 2020).

Otra actividad económica que ha sido ampliamente desarrollada por los pueblos indígenas es la agroforestería. Este no es el término utilizado por los pueblos indígenas pero, en su desarrollo económico y agrícola contemporáneo, este incluye muchas de las lecciones sobre los usos culturales del territorio de distintos pueblos indígenas. El manejo del territorio en cuanto a la diversificación de los cultivos y actividades de recolección, pesca y caza, la rotación de los cultivos y el cuidado de las plantas han sido estrategias de fortalecimiento de las economías sostenibles. Se integran así procesos de uso y producción con la conservación de los bosques, las aguas y la biodiversidad. En muchos casos, estos sistemas de producción han tenido resultados económicos importantes. Por ejemplo, el sistema agroforestal del pueblo Kayapó en Brasil ha tenido un rendimiento por hectárea hasta 180% más alta que la de los productores no indígenas y 170 veces superior a la producción exclusivamente ganadera (Cavalcanti, 1997 referenciado en Alarcón-Chairés, 2006: 59). También existen otros casos de éxito como el del pueblo Totonaca en México que ha logrado implementar un sistema de aprovechamiento diversificado de los recursos en minifundios (Toledo et al., 1994 referenciado en Alarcón-Chairés, 2006: 59).

Además, algunas comunidades indígenas han desarrollado diferentes emprendimientos bioeconómicos para aprovechar de manera sostenible los recursos y procesos biológicos. Uno de los ejemplos más emblemáticos de estos emprendimientos es el del Laboratorio de productos naturales Takiwasi en la Amazonía peruana. Este laboratorio es dirigido principalmente por la Federación Kichwa Huallaga Dorado (Fekihd), Urku Estudios Amazónicos y un grupo de once comunidades (nativas, pueblos originarios o asociaciones productivas) kichwas de la Región San Martín. El principio de trabajo de esta empresa es la conservación de la biodiversidad y a la revalorización y recuperación de los conocimientos tradicionales. En tal convenio incluyeron la implementación conjunta de un plan de negocios para la producción, transformación y comercio de especies de plantas amazónicas con aplicaciones medicinales y cosméticas, bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental, inclusión social e interculturalidad. Se estima que en los últimos años esta empresa ha beneficiado directamente a 989 familias e indirectamente a 4.667 personas (Noejovich, 2013).

¹⁷ 31,2% de los emprendimientos indígenas de turismo reportó ventas anuales menores 2.607,22 USD, el 22,9% registra ventas anuales entre 2.607,22 USD y 5.605,53 USD, el 17,4% vende actividades turísticas anuales por un valor total entre \$5.871,59 USD y 11.217,57 USD. Por su parte, sólo el 7,3% de los emprendimientos indígenas de turismo registraron ventas anuales de más de 44,779,04 USD (CIIR, 2020).

Otro emprendimiento bioeconómico de pueblos indígenas es la comercialización de las larvas de *Rhynchophorus* (“chontacuro”), el cual conforma una de las principales fuentes de proteína de la Amazonía colombiana, ecuatoriana y venezolana. Algunos estudios de caso muestran que el consumo promedio per cápita anual de este insecto en la Amazonía colombiana es de 6 kg, teniendo en cuenta que cada espécimen puede pesar entre 8 y 12 gramos. En Ecuador algunas familias indígenas han optado por comercializar estos insectos que son recolectados de las palmas locales por las mujeres y los niños principalmente. No obstante, también hay nuevos emprendimientos indígenas que buscan reproducir estos insectos en cautiverio para alcanzar mercados de mayor escala e incluso exportar los productos a otros países donde se utilicen los insectos como alimentación humana, como Japón (Aguilera et. al, 2017). También es importante destacar que estos nacientes emprendimientos aprovechan los insectos con usos terapéuticos, biotecnológicos y cosméticos.

Existen otros emprendimientos que aprovechan recursos forestales no maderables, en particular frutos y semillas, para la generación de ingresos. En la Amazonía se puede destacar el uso de frutos nativos con alta demanda en los mercados internacionales, como el copoazú, el asaí, o el arazá. En los últimos años, la producción de estos frutos se ha tecnificado para satisfacer la demanda en los proyectos turísticos o en los mercados regionales e internacionales (Hernández et. al, 2009; Hernández et. al, 2018). Ahora bien, durante las últimas décadas en Centroamérica han surgido algunas iniciativas -como la Red Nacional para la Seguridad Alimentaria en Guatemala (REDSAG) y Chikach- que buscan recuperar la producción y los conocimientos de plantas nativas de alto valor nutricional y de importancia cultural para los pueblos indígenas (Us, 2020: 40). Algunos ejemplos de las plantas nativas con altos niveles de proteína que han sido usadas tradicionalmente por los pueblos

mayas en Guatemala para asegurar su nutrición y que están siendo recuperadas en emprendimientos recientes son la chaya, el bleado, el chipilín, la hierba mora y la calabaza (Us, 2020: 25). Estas iniciativas de diversificación de alimentos, semillas y frutos han sido desarrolladas históricamente por los pueblos indígenas para el autoconsumo, pero en las últimas décadas se han insertado en estrategias de comercialización en mercados bioeconómicos, agroecológicos, entre otros.

Las economías rurales indígenas se desarrollan principalmente en minifundios o territorios comunitarios donde se integran diversas formas de producción y aprovechamiento sostenible que favorecen la conservación ambiental. En cuanto a la extensión de las propiedades agrícolas, en Chile, por ejemplo, el 84% de los predios individuales de aprovechamiento por parte de indígenas es inferior a 20 hectáreas (ODEPA, 2017). Además, estas actividades agroforestales son relevantes para muchas poblaciones indígenas, al punto de que en México más de dos mil comunidades rurales e indígenas se han movilizado para reclamar el manejo sostenible de los bosques para la producción de cacao y café, la elaboración de artesanías y el ecoturismo (Alarcón-Chairés, 2006: 49). Más aún, aunque no hay datos estadísticos suficientes para estimar los aportes de la producción indígena al Producto Interno Bruto, sí se puede reconocer que los pueblos indígenas proveen gran parte de los servicios ecosistémicos de la región que son la base para el desarrollo económico. Muchos pueblos indígenas implementan sistemas agroforestales que conservan las coberturas de bosques y pastos naturales. Por ejemplo, en Colombia, las unidades productivas agropecuarias de pueblos indígenas tienen una cobertura de bosques de 91% y de uso agropecuario de 7% (DANE, 2014). En Perú, 51% de la superficie usada por los pueblos indígenas para fines agropecuarios se mantiene en pastos naturales no manejados y 7% en montes (INEI, 2012).

09. MEDIO AMBIENTE

Muchos de los pueblos indígenas de la región habitan en zonas altamente biodiversas, donde han consolidado formas tradicionales de representación, uso y manejo de la naturaleza (FAO, 2008). De hecho, estos pueblos han desarrollado prácticas de uso sostenible que han procurado la conservación del medio ambiente en marcos culturales en los que la naturaleza está inmersa en las formas de organización social. En América Latina coinciden muchas de las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos con territorios indígenas. Solamente en América del Sur hay un total de 802 áreas protegidas, de las cuales el 27% (220 áreas) se yuxtaponen con territorios indígenas (Cisneros y McBreen, 2010). Este cruce entre áreas protegidas y territorios indígenas ocurre de cinco maneras: i) territorios indígenas que ya han sido titulados y quedan dentro de áreas protegidas; ii) territorios indígenas pendientes de titulación dentro de las áreas protegidas; iii) territorios indígenas reconocidos como área de uso tradicional (no necesariamente titulados); iv) áreas de conservación donde hay una gobernanza compartida entre los gobiernos y las comunidades indígenas (apuestas de co-manejo, co-administración o concesión); v) territorios con participación de los pueblos indígenas en comités de gestión (Cisneros y McBreen, 2010). De esta tipología, el 63.8% de los casos son del tercer tipo, cruces entre áreas protegidas y áreas de uso tradicional (Cisneros y McBreen, 2010: 3). Esta superposición entre territorios étnicos y áreas protegidas genera distintos retos y necesidades alrededor de la consolidación de estrategias de gobernanza compartida y co-manejo. El traslape entre estas zonas no necesariamente implica un ejercicio coordinado de manejo y conservación ambiental. Es más, en América del Sur sólo siete países (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela) reconocen e implementan estrategias de co-manejo entre áreas protegidas y territorios étnicos (Cisneros y McBreen, 2010: 111).

Figuras de conservación

El manejo de los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas no siempre ocurre en espacios titulados o que se encuentran dentro de áreas protegidas. Muchas veces estas poblaciones se relacionan con el ambiente natural en recursos de uso común donde no hay iniciativas de co-manejo oficiales o reconocimiento de derechos de propiedad, sino que son las comunidades locales las que han definido las estrategias de gestión ambiental (Borrini-Feyerabend et. al, 2014: 40). Además, el manejo de los recursos naturales incluye poblaciones reconocidas étnicamente pero también muchas otras comunidades que no se clasifican de esa manera, tales como campesinos, pescadores o u otras con denominaciones específicas de cada localidad o país.

El manejo de los recursos naturales por parte de estas poblaciones puede ocurrir en espacios de pesca, agricultura o bosques, sobre los que se han tejido acuerdos organizativos de larga data. La constitución y el mantenimiento de estos recursos de uso común se vinculan a múltiples motivaciones que incluyen la seguridad alimentaria, el respeto de sentimientos religiosos y culturales, la prevención de desastres naturales, la conservación de valores y beneficios intrínsecos de la naturaleza, entre otras (Borrini-Feyerabend et. al, 2014: 40). Además de las zonas de traslape con áreas protegidas y los territorios titulados, los pueblos indígenas habitan en zonas estratégicas para la conservación ambiental que muchas veces se sobreponen con otras figuras de manejo de los ecosistemas, tales como las reservas de la biósfera, las zonas Ramsar, las áreas de pesca responsable, los ecosistemas estratégicos y las reservas privadas (entre otras medidas efectivas de conservación, conocidas como OMECS).

Hay muchas figuras en donde estas formas de manejo de los comunes pueden articularse. Algunas organizaciones internacionales de conservación -como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN- reconocen que este tipo de gestión se ha traducido en los Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (TICCAS), donde se ejerce el cuidado ambiental de hecho (no obligatorio en términos legales o estatales). A nivel mundial, los TICCAS pueden llegar a ocupar una cobertura de entre 300 y 400 millones de hectáreas (Borrini-Feyerabend et. al, 2014). Este tipo de formas de gestión de los comunes (agua, tierra, bosque) representa el 20% de las estrategias de conservación de la Amazonía, aproximadamente (Borrini-Feyerabend et. al, 2014). En los últimos años, América Latina ha reconocido al menos nueve TICCAS, que representan un área de 7.992,12 km² (REDPARQUES et. al, 2018).

Estas figuras han suscitado interés porque responden a la noción de conservación ambiental con uso sostenible de los recursos. De hecho, gran parte del aporte de conservación ambiental de las comunidades locales (tanto indígenas como afrodescendientes) está relacionado con el logro de un equilibrio entre las actividades de extracción y la provisión de recursos naturales. Específicamente, muchas comunidades han construido acuerdos comunitarios legítimos (aunque no sean reconocidos legalmente) para regular el uso y acceso a los recursos naturales en términos de cantidades de extracción permitidas, tecnologías de uso y diferentes metodologías o finalidades de aprovechamiento. La regulación concertada, de manera comunitaria, de los recursos naturales ha reducido el riesgo de degradación de los recursos por la apropiación desmedida (Ostrom, 2015). Además, muchas de estas comunidades han institucionalizado y ejercido -aun sin reconocimiento legal- diferentes formas de provisión de recursos naturales para desarrollar actividades de cuidado, mantenimiento o protección (Ostrom, 2015). Estas actividades de provisión tienen que ver con la propagación de plantas, el cuidado de animales silvestres, la construcción de infraestructuras tradicionales para favorecer los flujos del agua, entre otras. Aunque estos territorios no están necesariamente titulados, las comunidades locales han desarrollado estrategias y normatividades propias para controlar el uso de los recursos y permitir su renovación y mantenimiento en el tiempo (UICN, 2019).

Incentivos económicos para la conservación

Los esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) compensan monetariamente a las comunidades (incluidas las indígenas) y a las personas que poseen o ejercen la custodia de los bosques y los recursos

naturales. En América Latina estos esquemas se empezaron a implementar desde 1997, cuando Costa Rica modificó una política de pago por reforestación que había sido implementada desde la década de 1980. A partir de ese momento se vincularon otros países a la implementación de estos esquemas, como México que inició su programa de PSA en 2003 y, para 2019, pagaba por la conservación activa de 2,3 millones de hectáreas. Actualmente, hay por lo menos 24 programas activos en la región en nueve diferentes países: Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. Aunque todavía no hay suficiente información sobre el impacto de estos programas en el bienestar de las comunidades y la conservación ambiental, hay estudios que señalan avances en el aumento de la cobertura vegetal. Por ejemplo, en Costa Rica se ha encontrado que el PSA aumentó la cobertura vegetal entre 0,2% y 14%, y redujo la deforestación entre 25% y 50% (en comparación con lugares donde no se había implementado estos esquemas, CODS, 2014).

No existe suficiente información sobre la relación entre los PSA y los pueblos indígenas, pero se sabe, por ejemplo, que hasta 2016 en Ecuador el programa “Socio Bosque” incorporó más de un millón y medio de hectáreas de bosques y ecosistemas, del cual más del 83% son de propiedad de las comunidades indígenas y afrodescendientes. En este programa, los participantes recibieron una compensación en efectivo a cambio de conservar el bosque (CODS, 2020: 14). Algunos estudios señalan que este programa ha tenido impactos socioculturales positivos y que las áreas manejadas dentro del programa se mantienen en un buen estado de conservación (Cotacachi, Perafán y Pabón, 2019). Algunos estudios en México señalan que el esquema de PSA de ese país ha involucrado una mayoría de población indígena y sus territorios colectivos, por lo que ha contribuido a fortalecer los ingresos locales y la inclusión social de los pueblos indígenas (Wunder et. al, 2008). No obstante, muchos programas de PSA han recibido una fuerte oposición de las comunidades indígenas porque los esquemas se han implementado sin concertación previa o porque los beneficios sociales y económicos se distribuyeron únicamente entre la población no indígena. Los PSA no son los únicos incentivos económicos para la conservación que se han implementado con los pueblos indígenas de la región; también existen otros incentivos tales como los derechos de propiedad, los bonos de carbono y restauración, los diferenciales tributarios, entre otros (Banco Mundial, 2017; FAO, 2003; UICN, 2000).



LÍNEAS DE TRABAJO DEL BID

El trabajo del BID en temas relacionados con los pueblos indígenas se fundamenta en los siguientes documentos internos:

- Una Política Operativa sobre Pueblos Indígenas y una Estrategia para el Desarrollo Indígena¹⁸ en la que se definen lineamientos para entender y apoyar el desarrollo con identidad¹⁹ y la gobernanza indígena, en sintonía con los avances legislativos de la región.
- Un Marco Sectorial de Género y Diversidad²⁰ que identifica las líneas de acción en las cuales el Banco enfoca su trabajo.
- Un Plan de Acción de Diversidad que establece metas corporativas para expandir el trabajo del Banco en esta área y mejorar su calidad.
- Además, el Banco cuenta con salvaguardias para evitar o minimizar la exclusión o impactos negativos derivados de sus operaciones con respecto a los pueblos indígenas y sus derechos²¹.

A partir del análisis presentado en este documento, proponemos áreas de trabajo estratégicas continuación para enfocar el trabajo del BID en los próximos años, las

mismas que se describen brevemente a continuación.

Retos en el ámbito urbano. El porcentaje creciente de población indígena que reside en zonas urbanas plantea áreas de trabajo emergentes para el BID en diferentes áreas: desde asegurar el acceso efectivo de esta población a servicios de calidad y con pertinencia (en educación, salud, empleo, entre otros), cerrar las brechas actuales en materia de acceso y calidad de vivienda e infraestructura y erradicar cualquier forma de discriminación o exclusión con respecto a la participación plena en los espacios económico, político y social.

Interseccionalidad. El BID tiene el reto de fortalecer un enfoque interseccional en su abordaje de todos los temas de diversidad, incluyendo el trabajo con pueblos indígenas en ámbitos urbanos y rurales, haciendo énfasis en los aspectos de género, de diversidad sexual, de inclusión de personas con discapacidad, y de migrantes. En este esfuerzo es relevante entender los contextos y conceptos propios de los pueblos, así como los avances y desafíos en la tenencia de la tierra, en la gobernanza de los territorios y en las dinámicas migratorias.

¹⁸ <https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2032314>

¹⁹ El desarrollo con identidad de los pueblos indígenas “se refiere a un proceso que comprende el fortalecimiento de los pueblos indígenas, la armonía con el medio ambiente, la buena administración de los territorios y recursos naturales, la generación y el ejercicio de autoridad, y el respeto a los valores y derechos indígenas, incluyendo derechos culturales, económicos, sociales e institucionales de los pueblos indígenas, de acuerdo a su propia cosmovisión y gobernabilidad” (BID, 2006: 5).

²⁰ <https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39435337>

²¹ En el 2020 se actualizó el Marco de Política Social y Ambiental en su Norma de Desempeño Número 7. Pueblos Indígenas. Los derechos indígenas se entienden como los derechos de los pueblos y personas indígenas, “ya sean originados en la legislación indígena emitida por los Estados, en la legislación nacional pertinente, en las normas internacionales aplicables y vigentes para cada país, o en los sistemas jurídicos indígenas” (BID, 2006:5).

Adecuación cultural de servicios. A pesar de los avances en cobertura de distintos servicios para los pueblos indígenas, persisten múltiples brechas que deben ser atendidas. El BID promueve la adecuación de los servicios de tal manera que las intervenciones de infraestructura, salud, educación, entre otros, sean apropiadas culturalmente y se articulen con las formas de manejo del territorio, las necesidades y los distintos usos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas.

En el ámbito de la salud, la adecuación cultural de los servicios requiere comprender los valores, la cultura y las visiones del mundo de los pueblos y tomar estos aspectos en cuenta en su diseño y operación. La adecuación cultural de los servicios de salud que operan en territorios indígenas es una dimensión clave de su calidad. Aspectos específicos que se pueden contemplar en este proceso de adecuación son el diseño de las instalaciones, la contratación de personal con los conocimientos lingüísticos necesarios, el mejoramiento de la comunicación, y la adaptación de las prácticas de salud a la cosmovisión de los pueblos.

En el ámbito de la educación, la adecuación cultural de los servicios contempla fortalecer los sistemas educativos interculturales y bilingües, impulsar los idiomas ancestrales e incluir el conocimiento tradicional en el sistema educativo²². Estos elementos tienen el potencial de reducir las barreras de acceso e incrementar la permanencia de niños y jóvenes indígenas en el sistema educativo. Aspectos específicos que se pueden contemplar en el proceso de adecuación son la formación y ubicación de maestros que hablen los idiomas ancestrales, el uso de materiales pedagógicos culturalmente apropiados, la promoción de la autoidentificación de los indígenas en los sistemas educativos y la integración de conocimientos tradicionales en los currículos. Dos temas en los cuales el BID ha trabajado menos son la adecuación cultural de programas de formación para el empleo y de los jardines de cuidado infantil.

Proyectos multisectoriales con enfoque cultural y territorial. A través de los proyectos del BID es posible articular esfuerzos desde múltiples sectores

para la mejora de condiciones de vida y de las oportunidades económicas de territorios indígena, con activa participación de las comunidades en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto.

Empleo y empresariado indígena. La recuperación del empleo y la creación de más y mejores empleos en el sector formal son prioritarias, y lo serán aún más en la post-pandemia. Este reto es aún más apremiante para los indígenas en la región, especialmente para los jóvenes y las mujeres. Además del fortalecimiento de los programas de formación, es necesario adaptar los servicios de empleo para que puedan orientar las rutas de empleabilidad específicas de esta población y ampliar su acceso a y permanencia en empleos del sector formal, eliminando sesgos discriminatorios (tanto en los servicios de empleo como en los espacios laborales).

En el ámbito empresarial, otra área de oportunidad es la promoción de los empresariados indígenas, facilitando su acceso a financiamiento, a cadenas de valor rentables y justas y a servicios de desarrollo empresarial.

Conservación ambiental de los territorios indígenas. Muchas de las áreas con mayor biodiversidad y riqueza forestal en la región coinciden con territorios indígenas. La sostenibilidad económica y ambiental requiere el diseño de estrategias que reconozcan la gobernanza indígena de la naturaleza y fomenten las prácticas que tradicionalmente han promovido la conservación de la naturaleza, entre ellas, el conocimiento tradicional sobre el manejo del territorio y el papel de las mujeres indígenas en el mismo. A su vez, un desarrollo sostenible de estos territorios requiere una adecuada comprensión de las presiones que enfrentan frente al cambio climático, los desastres naturales, las actividades ilícitas y la explotación de los recursos naturales.

²² Declaración del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032) por la UNESCO.

REFERENCIAS

- ACNUR. (2019). Evaluación multisectorial de las necesidades de la población proveniente de Venezuela. Maicao, La Guajira. Recuperado de: <https://data2.unhcr.org/en/documents/details/69117>
- _____. (2020). Atividades população indígena maio 2020. Recuperado de: <https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/6/5ed942b78e/informe-del-acnur-revela-que-el-65-de-los-indigenas-venezolanos-registrados.html>
- Aguilera, D. S., Sánchez, L. del R. F., Gil, M. de J. A., Guevara, D. P. S., & Poma, J. P. P. (2017). Los saberes ancestrales en el desarrollo local. Las larvas de *Rhynchophorus palmarum* I. Como recurso alimentario de los pueblos amazónicos. *Revista Amazónica Ciencia y Tecnología*, 6(1), 35-44.
- Alarcón-Chairés, P. (2006). Riqueza ecológica versus pobreza social. Contradicciones y perspectivas del desarrollo indígena en Latinoamérica. En A. Cimadamore, R. Eversole y J. McNeish (coords), *Pueblos indígenas y pobreza: enfoques multidisciplinares*. Buenos Aires: CLACSO.
- Albertos, C. (2019). Protocolo sociocultural [Diapositivas de PowerPoint]. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Albertos, C. (2020). Pueblos indígenas: un enfoque diferente para un mayor impacto [infografía]. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Albertos, C., Martín, C. (2021). Guía de conceptos clave para el trabajo con pueblos indígenas. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Alderman, H. & L. Fernald. (2017). The Nexus Between Nutrition and Early childhood Development. *Annual Review of Nutrition*, 37: 447-76.
- Araujo, C., P. Carneiro, Y. Cruz-Aguayo & N. Schady. (2016). Teacher Quality and Learning Outcomes in kindergarten. IDB WORKING PAPER SERIES Nº IDB-WP-665. Social Sector Inter-American Development Bank.
- Arisi, B. (2010). Matis y korubo, contacto y pueblos aislados: narrativas nativas y etnografía en la Amazonia brasileira. *Mundo Amazónico*, 1: 41-64.
- _____. (2012). La No-Frontera Pano: etnónimos como categorías alternativas y múltiples entre Matis y Korubo. *Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America*, 10 (1): 19-3.
- Artega, I. & P. Glewwe. (2017). Do community factors matter? An analysis of the achievement gap between indigenous and non-indigenous children in Peru. *International Journal for Educational Development*, 65: 80-91.
- Banco Mundial. (2015). *Latinoamérica indígena en el siglo XXI: primera década*. Washington DC: Banco Mundial.
- Banco Mundial. (2019). “Lenguas indígenas, un legado en extinción”. <https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2019/02/22/lenguas-indigenas-legado-en-extincion>

BID. 2021. Health Sector Framework Document. Social Sector.

BID. (2006). Política operativa sobre pueblos indígenas y Estrategia para el desarrollo indígena. Washington, D.C: Banco Interamericano de Desarrollo.

Borrini-Feyerabend, G., N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. Pathak Broome, A. Philips y T. Sandwith. (2014). Gobernanza de áreas protegidas: de la comprensión a la acción. Gland, Suiza: UICN.

Bruce, J., K. Wendland, y L. Naughton-Treves. 2010. Whom to pay? Key concepts and terms regarding tenure and property rights in payment-based forest ecosystem conservation. Land Tenure Center Policy Brief, 15.

Bueno, C. (1994). Migración indígena a la construcción de vivienda en la Ciudad de México. Nueva Antropología, XIV (46).

Calvacanti, C. 1997 “Patterns of Sustainability in the Americas U.S. and Amerindian Lifestyles” in Environmental Sustainability: Practical Global Implications (USA).

CELADE. (2020). Sistema de Indicadores Sociodemográficos de Poblaciones y Pueblos Indígenas. <https://redatam.org/redbin/RpWebEngine.exe/Portal?lang=esp>

Centro de estudios Interculturales e Indígenas, CIIR. (2020). Encuesta turismo indígena en tiempos de pandemia [Diapositivas de PowerPoint]. <http://www.ciir.cl/ciir.cl/wp-content/uploads/2020/10/ETITP-v4.pdf>

Chioda, L. (2011). Work and Family: Latin American and Caribbean Women in Search of a New Balance. Washington, DC: World Bank.

Cisneros, P. y McBreen, J. (2010). Superposición de territorios indígenas y áreas protegidas en América del Sur. UICN.

Colt, Steve. 2001. “Alaska Natives and the “New Harpoon”: Economic Performance of the ANCSA Regional Corporations”. Obtenido de https://pdfs.semanticscholar.org/71ea/9b2fdb4a0a4a2dd-3799f0ce6b4b17318166d.pdf?_ga=2.134314737.1419848597.1576628889-393567339.1576628889

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2008). Los pueblos indígenas y afrodescendientes en las fuentes de datos experiencias en América Latina. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

_____. (2009). Censos 2010 y la inclusión del enfoque étnico: hacia una construcción participativa con pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

_____. (2014). Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos. Santiago de Chile: CEPAL y Naciones Unidas.

_____. (2017). Panorama social América Latina 2016. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

_____. (2020). Los pueblos indígenas de América Latina- Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

CEPAL, UNFPA y UNICEF. (2011). Contar con todos. Caja de herramientas para la inclusión de pueblos indígenas y afrodescendientes en los censos de población y vivienda. Módulo 3. ¿Quiénes son los pueblos indígenas y afrodescendientes?: el difícil arte de contar. Naciones Unidas.

CEPAL et. Al. (2020). “El impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina-Abya Yala: entre la invisibilización y la resistencia colectiva”, Documentos de Proyectos(LC/TS.2020/171). Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Contreras-Pulache, Hans & Pérez-Campos, Pamela & Huapaya-Huertas, Oscar & Chacón Torrico, Horacio & Champin-Mimbela, Daniela & Freyre-Adrianzén, Lissette & Arévalo-León, Carolina & Torres-Llaque, Silvia & Black Tam, Carolina. (2014). La salud en las comunidades nativas amazónicas del Perú. Revista Peruana de Epidemiología, 18: 1-5.

- Cornell, S., y Jorgensen, M. (2007). "The Nature and Components of Economic Development in Indian Country".
- Cotacachi, D. (dir.), C. Perafán y M. Pabón. (2019). Comunidades sostenibles. Evaluación sociocultural del Programa Socio Bosque. BID, Nota técnica No. IDB-TN-01587. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Comunidades_Sostenibles_Evaluaci%C3%B3n_Socio_Cultural_del_Programa_Socio_Bosque_es_es.pdf
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. (2014). Censo Nacional Agropecuario. Sistema de consulta de indicadores disponible en: <http://formularios.dane.gov.co/sicna/start>
- _____. (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda. Sistema de consulta de indicadores disponible en: <http://systema59.dane.gov.co/bincol/rpwebengine.exe/PortalAction?lang=esp>
- Deere, C. D., S. Lastarria-Cornhiel y C. Ranaboldo. 2011. Tierra de mujeres: Reflexiones sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra en América Latina. La Paz: Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra y Fundación TIERRA. Disponible en: http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1377805458tierramujeresreflexionesaccesotierraenamericalatina.pdf
- Deruyttere, A. (2003). Pueblos indígenas, recursos naturales y desarrollo con identidad: riesgos y oportunidades en tiempos de globalización. Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Pueblos_ind%C3%ADgenas_recursos_naturales_y_desarrollo_con_identidad_Riesgos_y_oportunidades_en_tiempos_de_globalizaci%C3%B3n.pdf
- Duryea, S. C. Galiani, Sebastian, Piras, H. Ñopo. (2007). The educational gender gap in Latin America and the Caribbean. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank.
- Duryea, S., Salazar, J.P & Pinzón, M. (2019). Somos Todos. Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe [Infografía interactiva]. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Escobal, J., R. Fort & E. Zegarra (eds). (2015). Agricultura peruana: Nuevas miradas desde el Censo Agropecuario. Lima: GRADE.
- FAO. (2008). Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas en América Latina. <http://www.fao.org/3/a-az734s.pdf>
- _____. (2019). Ayudar a los pueblos indígenas a restablecer el equilibrio entre la fauna silvestre y la seguridad alimentaria. Alcanzar niveles sostenibles de pesca en Guyana. <http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1239251/>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO- and The Center for People and Forests -RECOFTC. (2016). Training Manual. Mainstreaming gender into forestry interventions in Asia and the Pacific.
- Glewwe, P. & E.M. King. (2001). The Impact of Early Childhood Nutritional Status on Cognitive Development: Does the Timing of Malnutrition Matter? *The World Bank Economic Review*, 15(1): 81-113.
- Hernández G., M. S., Barrera García, J. A., Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, & Kolumbien (Eds.). (2009). Frutas amazónicas: Competitividad e innovación (1a ed). Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
- Hernández G, M., Castro, S. Y., Giraldo Benavides, B., Barrera G, Jaime Alberto, & SINCHI. (2018). Seje, moriche y asaí: Palmas amazónicas con potencial : manual para procesos de capacitación y transferencia.
- Hintze, S (ed.). (2003). Trueque y economía solidaria. Buenos Aires: ICO, Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Horbath, J. (2008). La discriminación laboral de los indígenas en los mercados urbanos de trabajo en México: revisión y balance de un fenómeno persistente. En: M. Zabala (ed.), Pobreza, exclusión social y discriminación étnico-racial en América Latina y el Caribe (pp 25-52). Bogotá: Siglo del hombre.
- Horbath, J. y Maria Amalia Gracia (coords). (2018). La cuestión indígena en las ciudades de las Américas. Procesos, políticas e identidades. Buenos Aires: Clacso, Ecosur y Conacyt.

- Instituto Nacional de Estadísticas - Chile, INE. (2017). Censo de Población y Vivienda 2017. Resultados. https://redatam-ine.ine.cl/redbin/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CENSO_2017&lang=esp
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. (2010). Censo 2010 República de Argentina. Base de datos REDATAM. <https://redatam.indec.gob.ar/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?BASE=CPV2010A>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. (2012). IV Censo Nacional Agropecuario 2012. Sistema de consulta de datos disponible en: <http://censos.inei.gob.pe/Cenagro/redatam/#>
- _____. (2017). Censos Nacionales: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas. Sistema de consulta de base de datos disponible en: <http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/>
- _____. (2019). Condiciones de vida de la población venezolana que reside en Perú. Resultados de la “Encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país” ENPOVE 2018. Lima: INEI.
- INS. 2021. COVID-19 en Colombia. <https://www.ins.gov.co/Noticias/paginas/coronavirus.aspx>
- IUCN. (2020). Using economic incentives for biodiversity conservation. <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/PDF-2000-002.pdf>
- IWGIA. (2021). El mundo indígena 2021. <https://www.iwgia.org/es/documents-and-publications/documents/382-iwgia-libro-el-mundo-indigena-2021-esp/file.html>
- IWGIA & OIT. (2020). Efectos de la COVID-19 en las comunidades indígenas: una mirada desde el Navegador Indígena.
- Kindergarten. The Quarterly Journal of Economics, 131 (3): 1415-1453.
- López, D. Christian, C. Vargas, M. Calcagni, M. Fuentealba, R. (2016). Desigualdad, y Territorio en los pueblos indígenas en Chile: un diagnóstico latinoamericano y propuestas de investigación desde Rimisp, serie documentos de trabajo N°206, Desarrollo con Cohesión Territorial, programa Cohesión Territorial para el Desarrollo. Santiago Chile: Rimisp.
- Lozano-Gracia, N. y Young, C. (2014). Housing Consumption and Urbanization. World Bank, Policy Research Working Paper 7112. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/998081468003944551/pdf/WPS7112.pdf>
- Martin, Adrian, Nicole Gross-Camp, Bereket Kebede, y Shawn McGuire. 2014. Measuring effectiveness, efficiency and equity in an experimental Payments for Ecosystem Services trial. Global Environmental Change, 28: 216-26.
- Miranda-Chumacero, G. Terrazas, A., y Wallace, R. (2011). Importancia económica de la ictiofauna para comunidades indígenas Takanas en el río Beni. En P. Van Damme, F. Carvajal-Vallejos y J. Molina (eds.), Los peces y delfines de la Amazonía boliviana: hábitats, potencialidades y amenazas (pp. 235-245). Cochabamba: INIA.
- Moguel, P. y Toledo, V. M. (2000). Café, luchas indígenas y sostenibilidad: el caso de México. Ecología Política, 18.
- Morrison, Andrew, Carmen Albertos, Monserrat Bustelo, Agustina Suaya y Verónica Tejerina. (2017). Documento de marco sectorial de División de Género y Diversidad. Documento del Banco Interamericano de Desarrollo.
- Naciones Unidas. (2008). Pueblos indígenas urbanos y migración. https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/factsheet_migration_ESP_FORMATTED.pdf
- Nakamura, R. (2015). Vale do Javari: los más altos índices de indígenas aislados en el mundo. Povos isolados Na Amazonia. <https://boletimisolados.trabalhoindigenista.org.br/2015/12/09/vale-do-javari-los-mas-altos-indices-de-indigenas-aislados-en-el-mundo/>
- Noejovich, F. (2013). Conocimientos tradicionales y Biocomercio: La experiencia de un emprendimiento intercultural en San Martín. Perú biodiverso. <https://repositorio.promperu.gob.pe/handle/123456789/1364>

- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. (2017). Panorama de la agricultura chilena. <https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/panoramaFinal20102017Web.pdf>
- Organización del Tratado de Cooperación Amazónica - OTCA. (2018). Análisis diagnóstico transfronterizo regional de la Cuenca Amazónica ADT. Brasilia: OTCA
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2003). La hora de la igualdad en el trabajo. Genève: OIT. Disponible en: <http://www.ilo.org/declaration>.
- _____. (2014). Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lima: OIT/Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
- Ostrom, E. (2015). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. México: Fondo de Cultura Económica.
- Organización del Tratado de Cooperación Amazónica - OTCA. (2018). Análisis diagnóstico transfronterizo regional de la Cuenca Amazónica ADT. Brasilia: OTCA
- Pattanayak, Subhrendu K., Sven Wunder, y Paul J. Ferraro. (2010). Show me the money: Do payments supply environmental services in developing countries? Review of Environmental Economics and Policy, req006.
- Perafán, C. (2000). Adecuación de servicios financieros a las economías tradicionales indígenas. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido en <https://publications.iadb.org/es/adecuacion-de-servicios-financieros-las-economias-tradicionales-indigenas>
- Popolo, F., Oyarce, A. M., Ribotta, B. & Rodríguez, J. (2007). "Indigenous peoples and urban settlements: spatial distribution, internal migration and living conditions". Población y Desarrollo, 78. Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Puig, C. y Pilar Montalvo. (2011). Infecciones de transmisión sexual, vih y Sida: una aproximación a conocimientos, actitudes y prácticas de poblaciones adultas y jóvenes indígenas en las tierras bajas de Bolivia. Destacados, 35: 41-58.
- Raygada, G. (2019). Un nuevo modelo de desarrollo para nuestros pueblos indígenas. Banco Interamericano de Desarrollo - Mejorando vidas. <https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/un-nuevo-modelo-de-desarrollo-para-nuestros-pueblos-indigenas>
- Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada - RAISG. (2018). Pan- Amazonía. Evolución anual de la cobertura y uso de la tierra (1985-2018). Mapbiomas. <https://plataforma.amazonia.mapbiomas.org/map#coverage>
- REDPARQUES, Proyecto IAPA, Pronatura México. (2018). Progreso de cumplimiento de la Meta 11 de Aichi en los países de la Redparques: resultados y perspectivas al 2020. Bogotá, Colombia: CDB, Proyecto IAPA, Unión Europea, WWF, FAO, UICN, ONU Medio Ambiente.
- Rodríguez Gómez, D. & C. Harris-Van Keuren. (2012). Early Childhood Learning Guidelines in Latin America and the Caribbean. Washington DC: IDB.
- Sampaio, M., Turcotte, S., Martins, V., Cardoso, E., Burattini, M. (1996). Malaria in the indian reservation of "vale do javari". Revista do instituto de medicina tropical de são paulo, 38 (1): 59-60.
- Sánchez, C. (2015). "La migración indígena mexicana, interna e internacional". En G. Roldán y C. Sánchez (coord.), Remesas, migración y comunidades indígenas en México (pp. 70-89). México D.F: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Sánchez, J. (S.f.). Sistemas alimentarios amazónicos. Gaia Amazonas. https://www.gaiaamazonas.org/uploads/uploads/books/pdf/FINAL_-_INFORME_SISTEMAS_ALIMENTARIOS_INDIGENAS.pdf
- Secretaría de Salud de México. 2020. Panorama covid-19 en población indígena. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/602108/panorama-covid19-poblacion-indigena-17-diciembre-2020.pdf>

- Sepúlveda, B. y Zúñiga, P. (2015). Geografías indígenas urbanas: el caso mapuche en La Pintana, Santiago de Chile. *Revista de geografía Norte Grande*, (62), 127-149. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022015000300008>
- Sperling, G., R. Winthrop & C. Kwauk. (2016). *What Works in Girls' Education: Evidence for the World's Best Investment*. Washington, DC: Brookings Institute.
- Toledo, V. M.; Ortiz, B. and Medellín, S. (1994). Biodiversity Island in a Sea of Pastureland: Indigenous Resource Management in the Humid Tropics of Mexico. *Etnoecológica*, 11(3).
- UNFPA, MSI-B y SEDES Pando. (2015). *Perfil epidemiológico de los pueblos indígenas 2015*.
- UNICEF. (2017). *Study in Indigenous Women and Children in Guyana*. Georgetown, Guyana: UNICEF.
- Us, H. (2020). Contribución de plantas nativas a la seguridad alimentaria en comunidades Mayas de Guatemala. Banco Interamericano de Desarrollo, NOTA TÉCNICA N° IDB-TN-01824.
- _____. (3 de mayo de 2021). Situación y desafíos de los pueblos indígenas de Guatemala: un análisis comparativo de los censos 2002 vs 2018. Manuscrito por publicar.
- U.S. Department of State. (2021). *2021 Trafficking in Persons Report*.
- Villatoro, P. (2017). Indicadores no monetarios de privación en América Latina: disponibilidad, comparabilidad y pertinencia [Diapositivas de PowerPoint]. CEPAL: <https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/2017-05-pablo-villatoro.pdf>
- Wunder, S., Engel, S., & Pagiola, S. (2008). Taking stock: A comparative analysis of payments for environmental services programs in developed and developing countries. *Ecological Economics*, 65(4), 834-852. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.03.010>
- Zulueta, J. (2020). Enfoque de promoción integral de negocios indígenas. Lecciones de las políticas públicas implementadas en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Manuscrito no publicado.

